

63ª REUNION — Continuación de la 6ª SESION DE PRORROGA — OCTUBRE 23 DE 1959

Presidencia del señor diputado Jorge Raúl Decavi

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretario: doctor Enrique A. Pardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ALZABE, Pedro Bernabé
AQUINO, Porfirio Antonio
ARITO, Juan
ARMENDARIZ, Alejandro
AYBAR, José Antonio
BAIGORRIA, Nélida Rosa T.
BAUDUCCO, Enrique
BECERRA, Olegario Antonio
BEIRO, Angel Francisco
BELNICOFF, Manuel
BLANCO, Rubén Victor M.
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BONET CONVALIA, Salvador
BONIFACIO, Juan José
BREYTER, Isaac
BRUZZO IRAOLA, Juan P.
BULIT GONI, Enrique A.
BURDEOS, José Antonio
BUSTOS, Jerónimo L.
CAGGLIANO, Angel R.
CAMET, Carlos Ernesto
CASAS, José B.
CASELLA PINERO, Juan M.
CASTILLO, Hugo Enrique
CIALZETA, Domingo
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTTE (h.), Adolfo
CORREA, Carlos María
CORTES, Ezequiel
CUARETTA, César Ramón
CUEVAZ, Agustín
CHAVERO, Luciano
DAMIANI, Salvador
DECAVI, Jorge Raúl
DE LA VEGA, Juan Carlos
DÍAZ, Rosario Domingo
DOMINGORENA, Horacio Osvaldo
DOURS, Roberto José
ERREA, Daniel
ESCALADA, Alfredo H.
FAYA, Luis
FERNANDEZ, José Manuel
FERRARIS, Jorge Domingo
FOSSATI, Evers Nelson
GALLO, Luis M.
GARCIA, Ernesto
GARCIA FLORES, José I.
GARONA, Alberto Agustín
GIANSEIRA, Marino Alejandro
GILL, Miguel
GIORDANO ECHEGOYEN, Mario
GOLDSTRAJ, Zenón
GONZALEZ, Ricardo A.

GOROSPE, Valentín
GUTIERREZ, José María
HEREDIA, Bernardo M.
HEREDIA, Gilberto L.
HERNANDEZ RAMÍREZ, Rafael
JARA MELAGRANI, Ubaldo H.
JUAREZ PEÑALVA, Miguel, Angel
JUNIN, Simón
JURI, Jorge
LAFUENTE, Ambrosio César
LAFUENTE, Augusto Antonio
LAGOS, César M.
LICEAGA, José V.
LICEAGA, María Teresa M. de
LÓPEZ, Juan Raúl
LÓPEZ AGUIRRE, Juan J.
LÓPEZ BALLESTEROS, Horacio María
LÓPEZ SANSÓN, Ernesto
LUELMO, Horacio Flavio
LLUGDAR, Elías N.
MALUF, Emilio
MANES, Juan Carlos
MANTECÓN, Esteban
MANUBENS CALVET, Reginaldo
MARCONATO, Pedro Luis
MARCHINI, Atilio Enrique O.
MARINI, Anselmo A.
MARTIRANI, Luis
MERCADO, Valentín A.
MIGLIARO, Victorio M.
MONJARDÍN, Federico F.
MONTE, Ricardo Alvaro
MORENO, Eufemio Teófilo
MOSCA, Gabriel Carlos J.
MUSACCHIO, Vicente M.
NASSIF NEME, Carim
OREJA, Pablo Fermín
PAEZ, Nieves Humberto
PANELO, Ricardo E.
PARENTE, Miguel A.
PARODI GRIMAU, Misael J.
PARRY, Enrique
PERETTE, Carlos H.
PITTALUGA, José Saturnino
POITEVIN, R. Emilio
POLOGNA, Aurelio José
PONCE DE LEÓN, Martín A.
POSSE, Melchor S.
POZZIO, Antulio F.
PRECE, Angel Oscar
PURICELLI, Valdemar
RAVETTI, Francisco Antonio
RECIO, José A.
RIVERO, Jorge I.
RODRIGUEZ ABAYA, Agustín

RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRIGUEZ DÍAZ, Rogelio S.
ROSENKRANTZ, Eduardo S.
RUIZ, Lucho Carlos
SAGO, Fayiz
SALIM, Abraham
SANTAGADA, Nélida E.
SANTONI, Nabucodonosor
SAYAGO VALDEZ, Miguel Angel
SCHWEIZER, Bernardo
SEGOVIA, Carlos A.
SILVEIRA MARQUEZ, Carlos
SOLARI, Juan Alberto
SPANGENBERG, Enrique
SUAREZ, Facundo Roberto
TARULLI, Pascual
TECCO, Luis Alberto
TELLO ROSAS, Cándido
TESSIO, Aldo E.
TONELLI, Haroldo Juan
TORTONESE, Dante Oscar
TROILO, Eleogardo B.
URCELAY, Rafael Cándido
VALLE, Salvador
VILLAR, Alfredo

AUSENTES, CON LICENCIA:

ARAMBURU, Julio P.
BARRIO, Luis
BECERRA, Carlos Alberto
BENEVENTANO, Domingo
BERNASCONI, Mario
BERTONE, Marcos R.
CANEPA, Sebastián Oreste
CARDENAS, Juan Carlos
CARRETTONI, Jorge C.
DESPOUY, Pablo Pedro
FASCE, Antonio
FEIGUÍN de FERRARI, Berta
GARCIA VEIGA, Ignacio
GRANDI de MARTÍN, Palmira A.
GUTIÉRREZ, Victorino H. B.
LEÓN, Luis Agustín
LISCHETTI, Carlos A. M.
LÓPEZ, Juan Carlos Godofredo
MAS, Juan Antonio
SALOMONE, Humberto
TORTORA, Antonio
ZABRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, EN COMISION:

CARRERA, Rodolfo Ricardo
FREGA, José
LÓPEZ SERROT, Oscar
ZANNI, Enrique Mario
ZUBIAURRE, Alberto

AUSENTES, CON AVISO:

PENNACCHI, Alfredo Arquímedes D.
SUJEROS, Pedro Ignacio P.

AUSENTES, SIN AVISO:

ABAROA, Rufino Vicente
CALABRESE, Pablo

CONTIN, Carlos R.
FERREIRA, Jorge W.
FUERTES, A. Ricardo
GALEANO, Roberto A.
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GYSSELS, Néstor Juan
KRONHAUS, Arnoldo
PAVIOLO, Ricardo J.

PERALTA, Domingo Orlando A.
PERKINS, Jorge Walter
PITTO, Luis María
SOLANAS, Juan Carlos
STORANI, Conrado Hugo
UZAL, Francisco Hipólito
VECCHIETTI, Augusto Néstor
VINCIGUERRA, Romulo

SUMARIO

- 1.—Continúa la consideración del despacho de las comisiones de Industria y de Comercio en las modificaciones del Honorable Senado al proyecto, en revisión, de ley de vinos. Se sanciona. (Página 4398.)
- 2.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Recio a propósito de sucesos ocurridos en el palacio de los tribunales. (Página 4420.)
- 3.—Manifestaciones de varios señores diputados respecto de la continuación de la sesión. (Página 4422.)
- 4.—Solicitud de permiso para ausentarse de la sesión. (Página 4422.)
- 5.—Consideración del despacho de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de ley sobre análisis de artículos alimenticios importados de lugares cercanos a zonas afectadas por explosiones nucleares. (Página 4423.)
- 6.—Apéndice:
 - I.—Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 4427.)
 - II.—Inserciones solicitadas por señores diputados. (Página 4434.)

—En Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de octubre de 1959, a la hora 10 y 20:

1

LEY DE VINOS

Sr. Breyter. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Breyter. — Por intermedio de la Presidencia solicito que se invite a los señores diputados que están en las comisiones a concurrir al recinto a fin de reanudar la sesión a la hora 10 y 30.

Sr. Presidente (Decavi). — Así se hará, señor diputado.

—A la hora 10 y 30:

Sr. Presidente (Decavi). — Queda reanudada la sesión.

Continúa la consideración del despacho de las comisiones de Industria y de Comercio en las modificaciones del Honorable Senado al proyecto de ley de vinos (1).

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Santoni. — Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Industria debo significar que, con la firma de casi todos sus integrantes y sin disidencia alguna, se aconseja aprobar el proyecto de ley tal cual viene en revisión del Honorable Senado. El despacho es coincidente con el producido por la Comisión de Comercio, que fue informado ampliamente por el señor diputado Fossati en la sesión de ayer, con abundancia de citas estadísticas muy interesantes, que dan la pauta de la magnitud e importancia de la industria vitivinícola.

En efecto, esta industria ocupa el sexto lugar en el orden mundial. Nuestro país es superado sólo por Francia, Italia, España, Argelia y Portugal. Se estima el valor global de la industria vitivinícola en el país dentro del orden de los 45.000 millones de pesos. Por otro lado, ocupa permanentemente el trabajo de 120.000 personas, con el incremento del aporte de importantes núcleos de trabajadores durante el período de recolección de las uvas.

Baste decir que constituye la verdadera industria madre de las provincias de Mendoza y San Juan, así como fundamentalísimo factor económico de la provincia de Río Negro y de otras zonas del país.

Esta industria, que los egipcios practicaban hace 5 000 años, tiene una tradición de prestigio y potencialidad en el país desde el siglo pasado, por lo que debe ser amparada de las asechanzas que la desnaturalizan. Aunque somos partidarios de la diversificación de la producción y confiamos que muy pronto, con la concreción de los planes que realiza el gobierno, provincias como la de Mendoza estarán exportando hidroelectricidad, derivados del petróleo e importantes minerales, algunos de ellos ya industrializados, somos conscientes de que la riqueza vitivinícola hay que mantenerla y acrecentarla como base económica de una ramificación de actividades que pasen a compartir su primacía en la región.

El proyecto que consideramos viene a llenar esta necesidad, para adecuar la solución legal

(1) Véase el texto del despacho en la página 4353 del Diario de Sesiones.

del problema a los requerimientos de la época, ya que permanece aún en vigencia, desde hace más de veinte años, la ley 12.372, que resulta en muchos aspectos deficiente.

La iniciativa, que se aconseja aprobar tal cual viene en revisión del Honorable Senado, ha sido largamente estudiada y discutida durante dos períodos legislativos, y en el curso de las deliberaciones se ha ido enriqueciendo con el aporte de los sectores interesados en el problema.

Las modificaciones votadas por el Honorable Senado cambian la estructura original del proyecto pero mantienen el espíritu y el fondo de la cuestión en toda su integridad. Lo fundamental es la creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura, con suficiente fuerza y elasticidad para que resulte un organismo dinámico, con mayor autarquía, como factor de encauzamiento y promoción del desarrollo de esta noble industria, constituyéndose asimismo en barrera casi infranqueable para los aventureros que con su afán de lucro desmedido caen en la adulteración del producto y en la violación de disposiciones legales, causan inmensos daños en el prestigio de honestos productores, atentan contra la salud de la población y perjudican seriamente importantes sectores económicos.

Todo ello lo salva perfectamente la sanción que viene en revisión, para la que reclamo la inmediata aprobación de esta Honorable Cámara. Ella establece sanciones severísimas para los infractores, ya que no sólo han sido mantenidas las votadas por esta Cámara, sino acrecentadas.

Las multas aplicadas por la Dirección de Vinos alcanzan a la cantidad de 1.957 en los nueve primeros meses del corriente año.

Por las disposiciones actuales, muchas de esas penalidades no llegan a inquietar a quienes han obtenido ganancias considerables mediante maniobras ilegales, pero lo que va a desalentar la realización de maniobras dolosas y especulativas es la estabilidad de la industria, que es lo que la ley propugna.

El nuevo Instituto Nacional de Vitivinicultura dispondrá de los fondos necesarios para el fomento de la industria y la instalación de bodegas regionales en las zonas principales de producción, lo que asegurará la colocación de todas las partidas de uva obtenidas en cada cosecha. En esta forma no se repetirá el doloroso espectáculo de la uva que se pierde sin cosechar, con el consiguiente daño para la economía de la región, como ha acontecido en alguna oportunidad y podría repetirse en el futuro.

Las bodegas regionales y las bodegas que la actividad privada, mediante el auxilio de créditos especiales que se están propiciando, van a ir levantando, elevándose su número, aseguran el mantenimiento de un adecuado stock de vinos y mejorarán la producción, manteniéndose una relativa estabilidad en los precios, sin

que se produzcan altibajos que sólo benefician a los especuladores y desalientan al auténtico productor.

Un cálculo estimativo permite prever que al comienzo de la próxima vinificación se mantendrá un excedente de 7 millones de hectolitros, 4 millones de hectolitros de vinos finos y especiales y 3 millones de hectolitros de vino común. Teniendo en cuenta que una de cada cuatro cosechas se pierde por distintas razones —climáticas, plagas de cultivos, etcétera—, se hace necesario mantener un stock de vino común equivalente al consumo normal anual. Esto indica que la reserva de este tipo de vino debe llegar a los 8 ó 10 millones de hectolitros para asegurar en forma absoluta la estabilidad de la industria, poniéndose a cubierto de fracasos de la producción por causas imprevistas. A esto se llegará mediante la intensificación de la construcción de vasijas.

Pero lo que va a desalentar la comisión de maniobras dolosas, como ya he manifestado, son las medidas que tienden a perfeccionar esta industria, a intensificar la producción con arreglo a normas científicas, para que los cultivos de las viñas se realicen en forma cada vez más intensiva y la industrialización del vino se logre mediante una más perfecta mecanización.

El afán de los legisladores nacionales de perfeccionar la presente ley al grado máximo ha traído como consecuencia un año de retraso en la sanción definitiva de este nuevo régimen legal. Aún hoy, esta ley que va a votar la Honorable Cámara es susceptible de mayor perfectibilidad, pero seguramente no ha de ocurrir lo del año anterior. La modificación de una sola coma a la sanción del Senado podría traer como consecuencia que tampoco este año pudiéramos contar con ley tan necesaria.

Por eso la Comisión de Industria pide a vuestra honorabilidad proceda a dar definitiva sanción a este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Suárez. — Señor presidente: se encuentra a consideración de la Honorable Cámara un proyecto de ley cuya sanción evidentemente trae aparejada una gran responsabilidad.

Frente al problema de encontrarnos prácticamente abocados a los preparativos de la futura vendimia, entendemos que a los efectos de dotar a la industria de los elementos necesarios para su defensa y desarrollo, la ley debe ser votada sin enmiendas, a fin de que los poderes públicos y la actividad privada puedan hacer frente a los graves problemas derivados de la misma. Por ello, queremos dejar establecida la posición del sector de la minoría con relación a la ley.

La sanción de este proyecto es una vieja aspiración de los industriales de todas las zonas vitivinícolas del país, y también con ella se

tiende a contemplar el problema de los consumidores. Debemos reconocer que con relación a este problema, en los distintos sectores de la Honorable Cámara se ha puesto de manifiesto el deseo de llevar a feliz término la sanción del proyecto. Tan es así que siendo iniciativa de mi comprovinciano el señor diputado Juri, del sector de la mayoría, nuestro bloque le ha prestado todo el apoyo necesario sin tener en cuenta ninguna distinción de orden político, sino el bienestar, el desarrollo de una industria y de la economía del país.

Haciendo un análisis de la importancia de la producción vitivinícola del país, es bueno recordar palabras de un ex legislador mendocino y tratadista de cuestiones vinculadas con estos problemas. Me refiero al doctor Benito Marianetti, quien al hacer el estudio de las posibilidades de desarrollo de la industria vitivinícola en las provincias de Cuyo y en otras del país, en su obra *Problemas de Cuyo*, rendía homenaje a don Pedro de Arata, que fuera uno de los primeros historiadores de los problemas vitivinícolas. Con relación a la influencia y al aporte que introdujo la conquista española en América, destacó la importancia de la industria que nació con el espíritu progresista de los españoles que desoyendo las resoluciones monopolistas del gobierno de la metrópoli, introdujeron al país los primeros barbados, que fueron luego el origen de la extraordinaria riqueza que hoy contemplamos en las provincias de Cuyo.

El doctor Marianetti nos habla en su esbozo del padre Bernabé Cobo, quien en su libro *Historia del nuevo mundo*, relata cómo encontró las primeras manifestaciones de esta industria en América en unas vides que estudió, comprobando que era cepa virgen, de características híbridas, a las que no le prestaron mayor atención los colonizadores. Sin embargo, el padre Bernabé Cobo observó que ella podría ser una fuente de extraordinaria riqueza.

Lo más notable es que estas cepas de origen americano posteriormente salvaron a la industria vitivinícola europea, porque ellas son resistentes al flagelo de la filoxera, que determinó que en toda Europa se debiera replantar las viñas con estas cepas americanas. Podríamos decir que se conectaron en esta forma las dos fuentes de producción. América salvó con este resistente cepaje la producción que actualmente ostentan los países europeos.

Estas cepas americanas, a las que algunos no le asignaron importancia, determinaron que hoy, en Europa, existan millones de hectáreas productivas.

En un recuerdo histórico, debemos decir que los primeros datos que se han podido obtener acerca de la comercialización de vino existen en el Cabildo de Buenos Aires. En 1605 un señor Nogal pide permiso para introducir 50 arro-

bas de vino. Otra noticia sobre este asunto está relacionada con un señor Vargas, oriundo de la provincia de Mendoza, que pagaba los estudios que cursaba en la Universidad del Norte con productos de la provincia de Mendoza, en los que empezaban a verse también algunas arrobos de vino.

El primer censo sobre la materia se practica en el año 1786. Encontramos que se registra la exigua cantidad de 100 hectáreas de vid cultivadas en las provincias de Mendoza y de San Juan. En 1866 se manda realizar otro censo que revela una mayor extensión de los cultivos, pues la cifra alcanza a 500 hectáreas.

Las corrientes inmigratorias traen al país sus características, que transmiten después a este cultivo. Llegan al país una gran cantidad de italianos y de españoles, con sus usos y costumbres de labranza, que encuentran en la zona de Cuyo grandes posibilidades y similitudes con las regiones de sus naciones de origen. Se abre así la perspectiva de un gran desarrollo en los cultivos de la vid. Es de destacar que en ese período se producen las plantaciones que podríamos denominar plantaciones en masa de la Argentina.

Entre los pioneros de esta industria vitivinícola es justo reconocer a una figura extraordinaria por la obra cumplida. Me refiero a don Tiburcio Benegas, cuyos descendientes han continuado con gran interés y entusiasmo no sólo la empresa sino especialmente los estudios que inició el fundador de esta organización, de la que se puede decir que constituye un honor para la provincia de Mendoza. También corresponde señalar los nombres de Zapata y de Salvador Civit, como figuras destacadas, junto a las cuales ha colaborado un grupo de hombres que han sabido aprovechar las grandes posibilidades que les ofrecía aquella rica zona de la República.

Se inician las plantaciones que empiezan a adquirir características importantes. Uno de los incentivos fue el consumo en nuestro país de vino importado, que llegaba a los 2 millones de hectolitros por año. Esta gente se dedicó con gran esfuerzo a suplantar la importación de vino extranjero y procurar el abastecimiento del mercado nacional.

Con esta acción desarrollada por los pioneros, llega al país, como dije, un grupo de italianos y de españoles que vienen a dar un gran empuje a estas plantaciones y, como consecuencia, a elevar a cifras realmente notables la producción de las provincias de Cuyo. Por ello debo mencionar aquí, como un homenaje a esa labor desplegada con tanta intensidad en beneficio de la expansión de esta industria, los nombres de Giol, de Gargantini, de Lemos, Furlotti, Gabrielli, Catena y Vicchi, que aplicaron a la industria la técnica europea y contribuyeron a

hacer de la vitivinicultura una de las industrias más potentes de nuestro país. Podríamos decir de esa generación que son héroes anónimos de la industria madre de Mendoza.

Es digno de señalar, la forma en que se hicieron las explotaciones. Estas personas extranjeras se pusieron en contacto con los propietarios tradicionales de la tierra y realizaban contratos muy particulares: se les entregaba tierras a los inmigrantes españoles e italianos y ellos las devolvían, plantadas con vid al 50 por ciento a los propietarios de la tierra,

Merced a su trabajo es que estos hombres progresaron rápidamente e inclusive fueron compradores de las mismas tierras de esas familias que se las habían entregado en adelanto y, hoy vemos que los apellidos que he citado corresponden a grandes propietarios industriales de las provincias de Cuyo, que han impuesto un sistema que verdaderamente es digno de encomio.

Nace así esta institución magnífica que es el contratista de viñas, piedra angular, puede decirse, del progreso y del bienestar que hoy tienen sobre todo las provincias de Mendoza y de San Juan.

Esta actividad, que es poco conocida, y que ha dado lugar a la gran riqueza de Mendoza y de San Juan, no es un trabajo agrícola sino una industria agrícola; es el trabajo permanente y constante de todo el año, el trabajo de cepa por cepa, surco por surco, sin horario de descanso; es el trabajo de la industria llevado a la agricultura con una intensidad tal que me obliga a rendir homenaje a ese grupo de hombres, forjadores permanentes de la industria vitivinícola.

Lamentablemente la plantación de las viñas en nuestro país no se realizó en forma racional, y por ello, a poco de florecer la industria, se vio enfrentada con serios problemas derivados más que de la superproducción, de la mala distribución y del infraconsumo. Es así que ya desde 1910, en que las cifras alcanzan promedios importantes, se aprecia que el comercio del vino se había restringido por especulación y porque aparecían los grandes trusts que luego van a ir perjudicando el desarrollo normal de esa actividad.

Advierten momentos difíciles de grave crisis para la agricultura cuyana. Sabemos que a partir de 1910 una serie de disposiciones y la competencia de vinos europeos hicieron pensar en una relativa posibilidad de aquella industria, pero es aquí que con el advenimiento del gobierno popular del doctor José Néstor Lencinas, en Mendoza se trata de orientar, en forma completamente distinta, todo lo que se había hecho hasta el momento en esta gran industria.

Se trató de integrar el proceso económico, buscando destruir los monopolios, dar mayor importancia al pequeño propietario, a las co-

operativas agrícolas, y liberar al pequeño productor de los grandes consorcios creando las bodegas regionales y realizando una gran campaña de publicidad para hacer conocer los productos de Cuyo, especialmente los de Mendoza.

El gobierno del doctor José Néstor Lencinas dictó tres leyes fundamentales. Son ellas las 703, 758 y 759; se estableció el sistema de las bodegas regionales, que determinó la ruptura del sistema tradicional liberal de la economía al establecer la exigencia de que en ciertos lugares de las zonas vitivinícolas existieran bodegas del Estado para moler la uva de los pequeños propietarios a fin de que no estuvieran presionados por los grandes intereses monopolistas.

Fijó también un precio básico para la uva, cosa que no se conocía en el país porque es una de las primeras manifestaciones de la intervención del Estado en la economía.

Se recordará que los grandes bodegueros realizaban una especulación desenfrenada con perjuicio de productores y viñateros, quienes, al reducirse las compras y aumentar las existencias de materia prima perecedera renunciaron a la posibilidad de defender sus productos, entregándolos a cualquier precio.

Mediante este sistema se defendía el precio del producto, así como también el salario del obrero y del transportista, y fue por esta legislación que entre los años 1918 a 1921 la industria tuvo un renacer económico.

Desgraciadamente, esas leyes que yo califico de extraordinarias y precursoras del desarrollo económico nacional —porque en ese momento no se vislumbraba el gran porvenir y desarrollo industrial del país—, en algunos casos fueron declaradas inconstitucionales, y si bien en aquella época podían parecer revolucionarias, hoy debemos estimarlas como normales y acordes con el sistema constitucional del país.

Lamentablemente, como decía, se retrasó un proceso de liberación económica y de grandes posibilidades en la producción vitivinícola.

También he de destacar que a partir de 1930 otra grave crisis afectó a la vitivinicultura, tomándose medidas que a nuestro juicio constituyen en el terreno económico verdaderos dislates. Así, por ejemplo, en 1935, para solucionar un problema de infraconsumo, se dictan las famosas leyes sobre juntas reguladoras de vinos, que traen como consecuencia la extirpación de vides en 15.000 hectáreas de la provincia de Mendoza y 5.000 hectáreas de San Juan; que da lugar también al derramamiento de los vinos y, lo que es peor, a la destrucción de la base fundamental de las reservas, que habían determinado el gran prestigio de que gozaba nuestra industria.

Esta política, que entendemos que fue nociva para los intereses de la colectividad, reconocía como fundamento un concepto netamente in-

tervencionista; pero resulta curioso que hoy levanten las banderas de la libre empresa y del comercio libre casualmente las personas que votaron y defendieron leyes con sentido intervencionista y contra la libertad de comercio. El intervencionismo de 1918 a 1930 tenía un sentido de defensa de los intereses populares, y después lo tuvo de beneficio patronal.

Se perturba el normal proceso económico cuando se destruyen las fuentes de producción sin que se vaya al origen de la cuestión. En la época a que me refiero se levantaron muchas voces en contra de la ley, y tan aceptadas fueron las expresiones contrarias a una política que nosotros calificamos de suicida, que el mismo año que se extirparon las vides se produjo la misma cantidad de hectolitros —ocho millones— que se había producido anteriormente. Las cosechas de 1936, 1937 y 1938 demuestran que lo único que se había conseguido fue extirpar las malas vides, produciendo beneficios a algunos sectores en forma injustificada, al mismo tiempo que se demoró la solución de los problemas de fondo.

Hacía falta una política de difusión del producto, una política de prestigio de la industria, haciendo que el vino fuera más accesible al consumo popular. Las características de la industria señalaban la necesidad de canalizar toda o gran parte de la producción hacia el consumo de tipo popular, hacia el vino común de mesa, según la denominación clásica.

Evidentemente esta política, que nosotros calificamos de nefasta, tuvo una repercusión muy relativa, trajo la incertidumbre, trajo un poco de descreimiento en los trabajadores y en los hombres ocupados con esta industria, que vieron paralizada su actividad debido a la política desarrollada. Es digno de mencionar la lucha que realizó el centro de bodegueros trasladistas y determinado sector de la industria para defender el consumo del vino.

A raíz de las concentraciones obreras en los grandes centros de Buenos Aires y de Rosario, como también de la modificación de la estructura económica del país, y de la incipiente industrialización, nació un mayor poder de compra en los sectores populares, lo que determinó una nueva crisis, pero esta vez por falta de posibilidades de surtir al mercado con vinos nacionales. En vez de realizarse una política de expansión de las plantaciones y de capacidad de vasijas o bodegas, el gobierno peronista encaró el asunto con un sentido también intervencionista, y en contra del desarrollo económico y de racionalización de las empresas, haciéndolo en una medida que fue denunciada en su oportunidad por todas las fuerzas de la producción y por los partidos políticos, que yo calificué de desastrosa.

Se desvincularon las fuentes de trabajo, de producción y de comercialización, se creó un sistema ficticio de comercialización. Es así como por ejemplo, veíamos a boxeadores que de la noche a la mañana se dedicaban a la venta de vino. También hubo deportistas, políticos y hombres que nada tenían que ver con la actividad vitivinícola, a quienes se les daba preferencia especial para hacerse ricos en pocos días. Puedo traer un ejemplo para demostrar lo ocurrido en la industria. Hubo personas a quienes se les otorgaban cuotas de venta de vino y que tenían grandes posibilidades de realizar así un negocio floreciente. Por ejemplo se asignaba una cuota con vino tipo reserva, pero en realidad el vino era de tipo común. Ese vino se entregaba, como dije, a un deportista que era favorecido con dichas cuotas, quien lo embotellaba con su marca como vino de reserva, con un valor tres veces superior al del vino común. En esa forma se distribuían beneficios, defraudando al público, entre personas que no estaban conectadas con la industria.

Todo esto determinó también una disociación en el proceso laboral en las provincias vinícolas. Empezaron a pulular una serie de individuos que instalaron plantas de fraccionamiento, que luego fue lo que provocó el desprestigio de la industria, porque intervenían hombres ávidos de riqueza, que no tenían ninguna vinculación con el proceso económico cuyano, ni tampoco ningún interés por defender el desarrollo de la industria.

Yo creo que el mal de la falsificación que trata de reprimir esta ley nace en gran parte de ese disloque en la economía vitivinícola, por la intervención de un tercer factor que afecta a todo el proceso de la industrialización.

Quiero también destacar como un recuerdo justiciero la ley 439, votada el 25 de febrero de 1932 por el gobernador de San Juan doctor Cantoni, que determinó la construcción de la bodega del Estado, y una legislación vitícola que le permitió a la provincia solventar la crisis con mayores posibilidades que Mendoza.

En esta última vendimia se ha demostrado cuán previsora fue esa ley, que permite a San Juan disponer de un lugar donde depositar los mostos, librándose así de la especulación que se empeña en destruir el precio del vino, pero no para bajarlo en beneficio colectivo sino para su propio provecho.

Estos son los antecedentes que en forma inmediata ha tenido el Parlamento para estudiar y tratar de dar una solución al problema de la vitivinicultura.

Como antecedentes del proyecto presentado por el señor diputado Juri podemos citar la iniciativa que tuvo en 1956 el gobierno de la revolución al encarar en las provincias de Mendoza y San Juan el estudio integral del problema del vino. Se formó en aquel momento una co-

misión compuesta por el ministro de Economía, el ingeniero Pedro Colombi, de la Dirección de Industria de Mendoza; el ingeniero agrónomo Francisco Bustillo, de la provincia de San Juan; el señor Santiago Graffigna, de la misma provincia; el señor José Carlos Orfila, de la de Mendoza, y varios técnicos en la materia, comisión que elaboró un proyecto.

En ese mismo año el gobierno nacional encargó a una comisión de funcionarios el estudio de un proyecto de ley, que también podemos citar como antecedente, en el que colaboraron el señor director de la Dirección de Vinos, el ingeniero Lago, el señor Raúl Silva, de la Dirección General Impositiva, y otros funcionarios. En 1958 el ministro de Comercio encomendó estudios a un prestigioso industrial, doctor Crochesky, juntamente con productores de Mendoza y San Juan.

Entendemos que para valorar la importancia de esta ley debemos citar algunas cifras para apreciar cuánto cuestan en el momento actual el cultivo de la vid y su proceso de elaboración.

Consideramos primero cuánto cuesta una hectárea de vid en la provincia de Mendoza y de San Juan tomando precios normales y medios. En primer lugar, el precio de una hectárea de tierra lo podemos calcular en sesenta mil pesos, aunque sabemos que hay zonas donde vale mucho más. Luego los distintos elementos que se necesitan para la implantación de una viña: veintidós rollos de alambre a mil pesos cada uno, veintidós mil pesos; ochocientos postes a veintidós pesos cada uno, diecisiete mil seiscientos pesos; cinco mil plantas de vid necesarias para una hectárea, a un peso cada una, cinco mil pesos. En realidad estas cifras son aproximadas, porque según un informe del Ministerio de Economía, en la actualidad habría que elevarlas casi al doble. Continúo: ochenta postes para cabecera, a 50 pesos cada uno, total 4.000 pesos; el trabajo de implantación y nivelación, con precios muy económicos, se puede calcular a 5 pesos por planta, lo que da 25 mil pesos. El total llega, pues, a 133 mil pesos, más el interés que puede aplicarse a este capital durante tres años, en los cuales no brinda beneficios, lo que lleva la suma, aproximadamente, de 190 a 200 mil pesos.

A través de estas cifras puede comprenderse que es un deber de los poderes públicos amparar el desarrollo de esta riqueza, que es verdaderamente una industria agraria y no una mera explotación agrícola, pues se trata de cultivos de tipo permanente cuyos ciclos de crisis deben soportarse sufriendo ingentes pérdidas. No es posible mediante esta actividad especular a cada momento observando cuáles son los productos de mayor apetencia en el mercado de consumo.

Uno de los aspectos fundamentales que esta ley tratará de solucionar es el de aumentar la

capacidad de vasija. Para esto es importante que el país adopte una política vitivinícola en sentido afirmativo y nacional.

A veces, injustificadamente, se ha atacado a los productores e industriales cuyanos. Se ha llegado a pensar que esta ley puede favorecer la hegemonía y la pujanza de una sola zona del país. Estos fines están totalmente lejos no sólo de la ley sino de la propia vocación de los productores cuyanos. Reconozco que la zona de Cuyo es privilegiada, porque se dan ahí las condiciones ideales para la explotación vitivinícola.

Sr. Juri. — Si el señor diputado me permite, quiero recordar que industriales y productores de Mendoza y de San Juan ya están iniciando cultivos en Santiago del Estero, Córdoba y Entre Ríos. Por lo tanto, dejará de estar centralizado el cultivo de la vid en el país.

Sr. Suárez. — A eso iba, señor diputado. Además de las provincias que menciona el señor diputado, los productores cuyanos iniciaron experiencias en provincias para ellos tan lejanas como Misiones; allí observaron que los ciclos de lluvia no son permanentes, de tal modo que en las épocas de floración y maduración de las vides el régimen de lluvia es adecuado y permitirá el desarrollo conveniente de la explotación. Los institutos especializados de la Universidad de Buenos Aires, como también la Dirección de Vinos, están haciendo estudios para extender las posibilidades de plantaciones en esa zona; incluso un diputado de nuestro partido, en la provincia de Misiones ha requerido el asesoramiento e iniciado plantaciones con el apoyo de productores cuyanos.

No se trata, en consecuencia, de sostener un privilegio de tipo económico, sino expandir las posibilidades hacia el pleno desarrollo de la vitivinicultura. Creo que con una política inteligente referida a la capacidad de vasija y tendiendo al fomento de las exportaciones será factible diversificar la producción y racionalizarla: estas zonas se dedicarían a la producción de vinos de menor calidad y Cuyo trataría de obtener productos para la exportación. Siguiendo una política inteligente, estamos en condiciones de llevar a cabo la exportación de vinos; se trata de fomentar cordiales relaciones entre los industriales y no de competencia en el exterior de los industriales argentinos entre sí.

Tenemos que reconocer que en estos momentos el industrial cuyano se ve presionado por la especulación de los fraccionadores, que realizan su negocio día a día, mientras que los productores y los industriales de la zona de origen tienen que hacer frente a los problemas financieros para la disposición del capital necesario, entregando el producto paulatinamente y a precios a veces bajos, sin que ellos incidan en la economía del pueblo, puesto que los fraccionadores mantienen los precios altos. En definitiva, lo único que se produce es el deterioro de la industria y el beneficio exclusivo de quienes

están, digamos, en la tercera etapa, que de alguna manera podemos calificar de especulativa.

La colocación de la producción vitivinícola de las provincias cuyanas tiende a la normalización. La ley deberá tender principalmente a crear nuevas fuentes de consumo, procurando lo que manteníamos anteriormente, es decir, abrir las posibilidades del mercado internacional.

A efectos de no alargar mi exposición solicito la inserción de un cuadro que refleja las posibilidades de exportación de vino, preparado por el Consejo Internacional del Vino, y que conceptúo muy importante como antecedente ilustrativo para los hombres encargados de la aplicación de la ley y el futuro consejo directivo.

Los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra se han referido al personal que ocupa esta industria, y se ha dicho que 120.000 personas dependen de ella. Quiero aclarar que se trata de quienes realizan el trabajo directo, pero si agregamos los propietarios de las viñas, los contratistas y los transportistas, llegamos a una cifra muy superior, de modo que prácticamente al proceso del cultivo, comercialización e industrialización da ocupación a casi medio millón de personas.

Con respecto al precio del vino, que por ley se trata de defender, cabe señalar que los propios productores, con un gran sentido de responsabilidad, han tratado de mantener el vino al alcance del bolsillo popular. Como hemos manifestado anteriormente, la producción de vino está destinada en gran parte al consumo de tipo popular. Si se comparan las estadísticas puede apreciarse que más del 85 por ciento de la producción se destina al vino común que va a las mesas populares.

Pese a una propaganda sistemática, a veces injustificada contra la industria, los propios industriales y trabajadores han sido celosos guardianes del proceso y de la actividad lícita de elaboración. Tanto es así que la Asociación de Bodegueros Trasladistas ha procurado a través del diario «El Tiempo», de Cuyo, difundir los medios de combate en contra de los falsificadores y los medios más eficientes para que el propio pueblo realice el control de la calidad de los productos.

Tengo sobre mi banca el texto de las manifestaciones del presidente del centro, señor Roberto Canónico; del presidente del Sindicato de Productores de Vinos, señor Francisco Ferraro; del presidente del Centro de Productores de Viñas, doctor Luis González Raffo; del doctor Jorge Nazzari, así como también editoriales de importantes diarios cuyanos, como «El Tiempo», del 11 de enero de 1959; de «Los Andes», del 9 de marzo de 1959; «La Victoria», etcétera; en una palabra, los principales defensores del prestigio de la industria han sido los propios industriales y la gente interesada en el proceso, que

está constituida por las grandes entidades que he mencionado.

Los que han desprestigiado la industria son casualmente los hombres que habían venido un poco injertados en el proceso económico, como resultado de leyes irracionales en la explotación de la industria del vino.

A nuestro juicio, en la ley se ha llegado, después de largos debates, a una contradicción en ciertos aspectos. Personalmente no voy a formular reparos por entender que el país necesita la ley y que en su oportunidad podremos perfeccionarla.

Entiendo que es muy frondoso el directorio del instituto y que puede determinar no un progreso efectivo para el normal desarrollo de la industria, sino tener poca elasticidad en lo que respecta a la eficiencia del instituto. Creo que la actividad privada debe tener mayor intervención que la dada a través de este organismo. Pero, de todas maneras, esta ley es una necesidad para el país, y no la podemos paralizar por un formalismo. Digo un formalismo, porque la ley de la Junta Reguladora de Vinos tenía, al contrario de esta ley, una gran posibilidad en la intervención de la actividad privada a través del consejo asesor. Sabemos cuáles han sido sus resultados, y que más que defender a la industria defendió a las grandes inversiones, incluso con el Instituto Movilizador. Así, las grandes bodegas en crisis, las bodegas monopolistas como Giol, transmitieron todas sus deudas a ese instituto, haciéndolas recaer sobre el erario colectivo.

No hago ninguna cuestión fundamental sobre este aspecto. El problema planteado por la Junta Reguladora de Vinos es un antecedente, pero últimamente las cosas han cambiado en el país, por lo que es necesario darle una participación más amplia a la actividad privada.

La ley contiene una serie de disposiciones dignas de tenerse en cuenta. La parte policial del vino es sumamente seria y de gran responsabilidad, por lo elevado de algunas penas. Es conveniente andar con cautela en este asunto, porque la modificación del Senado al proyecto sancionado por Diputados es un poco avanzada al no dar mayor posibilidad para la defensa. Todo esto debe contemplarse en la reglamentación de la ley, en el manejo ecuánime del consejo directivo en la acción a desarrollar.

Entiendo que al determinarse el embotellamiento del vino en la zona de origen, en los denominados regionales, se realiza un acto ponderable que tiene gran prestigio y trascendencia para la industria. Me parece que con un sentido nacional debemos propender al desarrollo de la industria vitivinícola en todas las zonas del país donde se den las condiciones necesarias para que él pueda llevarse a cabo; pero tampoco debemos crear una posibilidad que

pueda desvirtuar las aspiraciones de los consumidores.

Y es así como al establecerse la obligación del embotellamiento de los vinos en el lugar de origen se determinará la extirpación de una corruptela que existe en el país, lo que redundará en mayor prestigio de la industria.

A los efectos de abreviar la exposición quiero dejar establecido que si bien la ley que consideramos no es el *súmmum* de la perfección, lleva el propósito de contribuir al desarrollo de una industria importante del país, que ocupa un lugar preponderante en la vida económica nacional. En el orden internacional nuestro país, de acuerdo con los datos de la cosecha 1957, ocupa el tercer lugar.

Con nuestro voto tratemos de solucionar en algo la situación planteada a la industria vitivinícola, con criterio de buena política y sin sentido de interés regional, a fin de dar seguridad de desarrollo y expansión no sólo a ella, sino al comercio interno y externo de sus productos, con lo que habremos cumplido con nuestro mandato y con el país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Tonelli. — Señor presidente: haré brevísimas consideraciones con el propósito de contribuir a la rapidez del trabajo que hoy debe realizarse a la Honorable Cámara, y con la esperanza de que ella apruebe esta tarde el proyecto de ley del Poder Ejecutivo ampliando el subsidio para concluir el proceso de reconstrucción de San Juan.

Las exposiciones brillantes de los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, me eximen de hacer mayores comentarios. Me afirmo en este criterio porque ha existido unanimidad en los miembros de la comisión para aprobar el proyecto de ley que consideramos, con las modificaciones propuestas por el Honorable Senado de la Nación.

Como manifestaron los señores diputados Suárez y Santoni, esta ley es perfectible, pero el país necesita urgentemente un instrumento legal que ampare a los industriales y comerciantes honestos, así como también a los consumidores. Por eso existe urgencia en aprobar la ley.

Con estas palabras dejo expresada mi adhesión al proyecto que considera la Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Juri. — Señor presidente: en oportunidad de considerar a la Honorable Cámara este asunto el año pasado, los legisladores de la mayoría y minoría lamentaron que fuera tratado en forma algo apresurada. Alguna prensa se hizo eco de ello, es decir, del apresuramiento con que fue sancionado. Con fecha 18 de octubre «La

Prensa», con sentido crítico constructivo, publicó un artículo que tengo sobre mi banca. Posiblemente, fue un error nuestro no darle al asunto una mayor difusión periodística en esa oportunidad. Pero en homenaje a la verdad, debo manifestar que habían intervenido en el estudio de la ley todos los sectores de la producción, de la industria, del comercio y también de los consumidores, representados a veces por técnicos y otras por sectores liberales.

Quiero destacar que después de nueve años de aplicación de la ley 12.372 los senadores nacionales Mathus Hoyos y Soler proyectaron la autarquía de la Dirección Nacional de Vinos, que no llegó a concretarse. Posteriormente, en 1953, se creó una comisión interministerial integrada por los doctores Selva, Guevara e Iglesias, en representación del Ministerio de Industria y Comercio y el doctor Luis de Prado y señores René San Miguel y Raúl A. Señorans, por el Ministerio de Hacienda, los que se expidieron proyectando una nueva ley de vinos con modificaciones sustanciales en lo que se refiere a penalidades y procedimientos.

Por resolución 53 del 30 de septiembre de 1955, el entonces ministro de Economía, Obras Públicas y Riego de la provincia de Mendoza, ingeniero Guillermo Suárez —hermano de nuestro colega comprovinciano diputado Suárez—, creó una comisión especial integrada por jefes de reparticiones y funcionarios superiores del ministerio a fin de estudiar la situación legal, técnica y económica de esta industria, con el objeto de adoptar las medidas tendientes a solucionar sus problemas. Esta comisión elaboró un proyecto de ley que fue sometido a consideración pública en reuniones a las que asistieron el ministro de Economía de San Juan, ingeniero agrónomo Enrique López Mansilla; el subsecretario del Ministerio de Economía de Mendoza, doctor Horacio Gianella; director del Instituto de la Vid y el Vino, ingeniero agrónomo Pedro Zuloaga; director de industrias, señor Pedro Colombi, y, entre otros, los industriales y productores ingeniero agrónomo Francisco Bustello (San Juan), José Carlos Orfila (Mendoza), Andrés Filippini (Mendoza), Carlos Salvo (Mendoza) y Santiago Graffigna (San Juan).

Quiero destacar que el ex secretario de Comercio doctor Carlos Orfila creó en enero de 1956 una comisión interministerial de técnicos integrada por el doctor Gilberto González Monasterio e ingeniero agrónomo Juan M. Lagos como titulares, y enólogos Américo Chionetti y Enrique Ramón Bustos como suplentes, de la Dirección de Vinos; como representantes del Ministerio de Comercio, señor René San Miguel, de la Dirección General Impositiva, y doctor Raúl J. Selva.

En la preparación de esta ley han intervenido todos los sectores: los productores, representados

por los viñateros auténticos; los elaboradores, los bodegueros, los industriales de Mendoza, de San Juan y de todas las provincias vitivinícolas; los técnicos, los sectores que representan al trabajo. Vale decir que esta ley no es precisamente una iniciativa de un grupo de legisladores, sino que se ha proyectado hace cinco años y se ha venido estudiando y trabajando en su redacción. De modo que al prestar esta Cámara su sanción al proyecto de ley que consideramos, los legisladores tendremos la satisfacción del deber cumplido.

En una carta que dirigí al diario «La Prensa», señalé en cierta oportunidad que en la redacción de esta ley habían trabajado todos los sectores.

Quiero precisar algunas de las bondades de este proyecto de nueva ley de vinos que contempla una real y efectiva acción del Estado en aquellos aspectos que son parte de su acción de policía y represión y del asesoramiento y apoyo al productor, en una industria que por estar radicada en muchas manos y por su naturaleza misma no permite la formación de monopolios.

Existen diversos argumentos que afirman la necesidad de sancionar una ley como la proyectada.

Una organización que podríamos calificar de perfecta existe por parte del Estado en Francia, Italia, España, Portugal y Alemania, entre otros países vitivinícolas donde funcionan entes estatales de represión del fraude; y en estrecha vinculación con éstos, existen organismos mixtos que se dedican a la certificación de la calidad y su difusión, con cientos de estaciones experimentales vitícolas-enológicas, comités mixtos para la propaganda en favor del vino, etcétera. En estos países y en otros como Bulgaria y Rumania, el control técnico de la industria tiende a impedir la fabricación de vinos artificiales, la falsificación de vinos por adición de materias perjudiciales para la salud y la falsificación de vinos por sustancias no nocivas para la salud, y se efectúa en forma intensiva a tal punto que se ejerce por inspectores comunales. Hay que hacer notar que una comuna tiene alrededor de cinco mil habitantes y que los inspectores comunales son controlados y dirigidos por un inspector regional.

Lo expuesto así, a grandes rasgos, da la pauta de la importancia que se asigna a este control que de ninguna manera se circunscribe al aspecto bromatológico, toda vez que la falsificación es orientada según la evolución económica a la que va directamente vinculada y en la que tiene importantes derivaciones.

Cabe consignar que en todos los países se lleva por separado y correlativamente el control impositivo de esta industria. Dada la envergadura de la misma, en nuestro país —donde en el último año del que se poseen estadísticas fe-

hacientes en que la producción de vinos ha sido baja, como fue el de 1954, ocupa el quinto lugar en importancia detrás de la industria de la carne, de la harina, del azúcar y de los productos de lechería, y en el orden internacional nos ubica en el cuarto lugar luego de Francia, Italia y España— es evidente que existe una especial atención por parte del Estado en lo que se refiere a policía y promoción.

Esta industria está formada por 41.000 viñedos, alrededor de 2.000 bodegas, 2.215 plantas de fraccionamiento cuyo volumen de existencia en bodegas al 31 de agosto del corriente año se estimó que representaba un valor de 11.000 millones de pesos. En este sentido es dable destacar que si se mantuviera para este año la salida de vino del año anterior, se podría calcular un ingreso aproximado de 900 millones de pesos en concepto de impuestos internos, recaudación que es posible asegurar si el control de la elaboración, fraccionamiento y comercio de vinos se efectúa en forma eficiente.

Si a lo expuesto agregamos la importancia que reviste la vitivinicultura como fuente de trabajo, riqueza y bienestar social en las provincias de Cuyo, así como en las de Río Negro, Neuquén, La Rioja, Catamarca, Salta, Córdoba y Buenos Aires, y en otras como Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones —respecto de la que destacaba recién el señor diputado Suárez que existe una nueva experiencia—, así como también la de Santa Fe, es de prever que en un futuro no muy lejano podrán abastecer con su producción su propio mercado. Y lo que es más importante, pensamos los legisladores que si la creación de este instituto resulta un verdadero éxito, en pocos años más nuestros vinos tendrán que exportarse, porque, como dijo el señor diputado Suárez, su calidad es tan noble como la de los de cualquier país de Europa.

Nosotros queremos destacar que hay inquietud dentro de los gobiernos por la represión del fraude, el cual se ha venido agudizando en los últimos años. Quiero expresar también que en algún aspecto muchas provincias han tenido que dictar sus propias leyes para reprimir el fraude frente a la falta de defensa por la carencia de una ley nacional.

Es interés del Estado asegurar la genuinidad de un producto que tanto arraigo tiene en el consumo popular, no sólo para afianzar el consumo interno sino también para conquistar mercados en el exterior sobre la base de su indiscutida calidad.

Es necesario también encarar en forma racional un plan de fomento de esta actividad económica, pero nunca racionalizar los cultivos. En ese aspecto Río Negro, Neuquén y La Rioja han manifestado su inquietud, pero no había la intención, ni en la gente que trabajó anteriormente ni en los legisladores actuales, de racionalizar los cultivos. La prueba evidente de que

no hay egoísmo de los sectores vitícolas es que esta industria se está experimentando en muchas otras provincias.

No existe en nuestro país una diversificación de la producción vinica, como ocurre en Europa. No es necesario entonces que existan varios organismos; creemos que a través de este instituto y proporcionándole vehículos, personal técnico, laboratorios fijos y móviles, se podrá realizar esa labor.

La comisión investigadora designada por el Senado, presidida por nuestro comprovinciano el señor senador Cañeque, demostró que esos laboratorios móviles tuvieron una importancia extraordinaria —y la prensa lo ha destacado una cantidad de veces—, pues han podido sorprender plantas fraccionadoras que, con absoluta falta de responsabilidad, falsificaban y adulteraban vinos.

La concentración en un solo ente facilitará la acción del Estado en el aspecto represivo y, por lo tanto, en el de la promoción y propaganda de la vitivinicultura y, asimismo, obviará muchos de los trámites que actualmente se ven obligados a cumplir, en distintas dependencias, los viñateros, bodegueros y fraccionadores de vino.

Muy especialmente cabe destacar que la Oficina Internacional de la Viña y del Vino, organismo internacional al que nuestro país se halla adherido, en su 389 sesión plenaria realizada el año pasado en Luxemburgo, aprobó la resolución número 6, por la que recomendó «a los países adherentes, centralizar y reforzar los servicios oficiales de la represión de los fraudes en los países vitivinícolas», recomendación a la que, de aprobarse la creación del instituto proyectado, se le daría la más cabal interpretación.

Quiero destacar algunas ventajas y beneficios que han de lograrse con la creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura, señalándolos esquemáticamente.

En primer lugar, el apoyo al productor y al industrial bodeguero, a quienes se garantizará la genuinidad del producto en todas las etapas de su comercialización; mediante un riguroso control que estará a cargo del organismo, se le pondrá a cubierto de la competencia desleal que tantos perjuicios produce a su economía y que actúa como factor de desaliento; al prestigiarse la calidad y la pureza del vino, restableciéndose la confianza, se le asegurará un mercado firme, precios compensadores y desarrollo consiguiente de la explotación industrial; mediante el impulso que se dará a la investigación agrícola y enológica se obtendrá el perfeccionamiento de los cultivos, mejores rendimientos económicos debido a una explotación más racional, defensa contra las plagas, determinación de las zonas ecológicamente más aptas, métodos de elaboración racional, etcétera; se tenderá a la

tipificación —lo que es muy importante— y al estímulo de aquellas zonas donde la vitivinicultura puede incidir favorablemente en la economía regional; se alentará la exportación y conquista de nuevos mercados que eliminarán para siempre todo temor de una superproducción, como la que afectó a la industria en épocas no muy lejanas, y que en el momento actual se cierne nuevamente sobre ella.

El proyecto prevé también una afectación no inferior al diez por ciento —que el Senado elevó al veinte por ciento— de los recursos anuales para un fondo destinado al fomento de la vitivinicultura y construcción y habilitación de bodegas regionales.

Los productores sin bodega se verán libres de la preocupación que año a año se renueva en períodos de vendimia, motivada por el precio de venta a que podrán comercializar su uva, agravada por la circunstancia de referirse a un fruto de carácter perecedero. La bodega propia, inaccesible a la economía particular, se transformará en un hecho posible gracias a las bodegas regionales, cuyo destino ulterior será luego su transferencia a las entidades de productores auténticos, agrupados en cooperativas de elaboración y distribución.

La bodega regional contribuirá también a la mejora de la calidad y a despertar en los productores el concepto de solidaridad, propio de quienes desarrollan un esfuerzo en común y se sienten unidos a una misma empresa, compartiendo iguales anhelos e inquietudes. Al respecto ya hizo algunas citas el señor diputado Facundo Suárez y yo quiero agregar que en 1956 el gobierno de la Revolución Libertadora hizo construir en la provincia de Mendoza, precisamente en mi departamento, una bodega regional que salvó casi la tercera parte de la uva de General Alvear y otras zonas.

Se cuenta también con una valiosa experiencia que resulta de la acción desarrollada por las tres bodegas regionales instaladas en la provincia de La Rioja por la ex Junta Reguladora de Vinos, y actualmente a cargo de la Dirección General de Vinos.

Es indudable que una eficaz labor contra el fraude resulta en síntesis la mayor obra de fomento al consumo del vino, toda vez que al bregar por su calidad acrecienta las posibilidades del incremento de su consumo.

Ya se ha dicho que nuestro país produce esencialmente vinos comunes, y una labor inteligente dentro de un organismo con medios y libre de trabas burocráticas, podrá orientar el cultivo en las zonas más aptas hacia la obtención de vinos finos, reservas y típicos, con miras a la formación de stocks suficientes que permitan la conquista de los mercados extranjeros, y, por otra parte, se logrará fomentar el cultivo en otras zonas con vistas al abastecimiento interno.

También es importante destacar la defensa del consumidor. El instituto representará el órgano de defensa más efectiva que tendrá el consumidor argentino y extranjero de los productos que se expendan en el mercado local y extra-territorial.

La ley en vigencia prevé la represión del fraude y contempla penalidades y sanciones acordes con la magnitud de la infracción. Lamentablemente la actual Dirección General de Vinos y Otras Bebidas carece de los medios que posibiliten una efectiva represión, y ello ha traído como consecuencia la proliferación de las infracciones y fraudes. Por otra parte, la nueva legislación refuerza las penas.

El instituto estará dotado de los medios que hagan factible una eficaz acción de vigilancia, tanto preventiva como represiva. El control gravitará en todos los procesos, tanto en los lugares de elaboración como en los de fraccionamiento, expedición y distribución final.

Para dar un ejemplo práctico, vamos a llegar a esto: si se comprueba que en un restaurante se ha agudado vino, la pena va a ser aplicada cuando se compruebe la infracción.

El estiramiento debe ser desterrado definitivamente de las prácticas comerciales, pues ello no sólo constituye un fraude a la buena fe del comprador, sino también una sustracción o despojo indirecto que se efectúa al productor honesto, que de esta manera debe sufrir las consecuencias de una competencia desleal.

En cuanto a la salud del consumidor, merece que se le garantice que el producto adquirido está libre de todo tratamiento o práctica que afecte su genuinidad, sin cuya garantía no podemos aspirar nunca a tener una industria pujante y sólida.

El vino es considerado con razón la más higiénica de las bebidas, y el futuro instituto será el responsable directo de que el vino argentino sea de genuinidad indiscutida.

Quizá sea oportuno señalar, al hablar de defensa del consumidor, que la acción coordinada con las provincias, a la que está facultado el instituto, hará más eficaz el control en las plantas de fraccionamiento y consumo, donde en la actualidad ha sido posible comprobar mayores infracciones.

Medidas como esta demuestra, señor presidente, la eficacia de la colaboración de los gobiernos provinciales. El año pasado Mendoza elaboró su propio plan de defensa de la industria, a través de su ministro de Economía, y tenemos que destacar que las adulteraciones se redujeron en un 90 ó 95 por ciento por la acción represiva del gobierno provincial. Lo mismo ocurrió en las provincias de San Juan y Río Negro.

Deseo decir algunas palabras respecto a las medidas de desarrollo y perfeccionamiento de la producción, la industria y el comercio vitivinícola.

Se ha previsto que el consejo directivo pueda celebrar convenios con los estados provinciales, municipalidades y otros organismos públicos, a fin de coordinar la acción a desarrollar. Ello habrá de permitir que las medidas de desarrollo y perfeccionamiento, expresamente contempladas por la ley entre las funciones del consejo directivo, puedan aplicarse en todas las zonas del país. En este sentido se ha notado la preocupación de diversos gobiernos provinciales, que quieren asegurar la genuinidad de esta bebida, lo que ha llevado a concretar en la actualidad una labor represiva en colaboración entre el gobierno de Entre Ríos y la Dirección General de Vinos y Otras Bebidas, y se hallan a estudio similares planteos con los gobiernos de La Pampa y Neuquén, lo que al mantener la centralización de los servicios, los intensifica mediante el aporte de personal especializado, pero que solucionan momentáneamente un problema de candente importancia.

Decíamos recién que la Argentina forma parte de organismos internacionales especializados en materia vitivinícola, cuya misión es coordinar esfuerzos y acopiar la experiencia de los principales países vitivinícolas en materia de métodos de prevención en la lucha contra las plagas de los viñedos, selección de cepajes, tipificación de los vinos, explotación racional de las bodegas, perfeccionamiento de los medios de distribución, aprovechamiento de los subproductos, etcétera, organismos que, por medio de congresos y recomendaciones, tienden no sólo a la consolidación y perfeccionamiento de la industria del vino, sino también a la elevación espiritual y económica del productor.

Nuestra industria, que a diferencia de la de los países europeos, depende actualmente sólo del consumo interno, tiene necesidad perentoria de perfeccionar su producción a fin de hallarse en condiciones de competir con los exportadores tradicionales de ultramar.

El instituto tiene, pues, una gran función a cumplir en ese sentido, mejorando la calidad de los vinos, tendiendo a la tipificación de los productos, creando las condiciones favorables para el perfeccionamiento de la producción, la industria y el comercio.

Cuando ello se concrete, el consumidor argentino tomará vinos más nobles a precios razonables, la economía recibirá la afluencia de las divisas fuertes cuya falta es motivo de la actual penuria económica, y la prosperidad consiguiente permitirá la elevación del standard de vida de viñateros, contratistas, y personal asalariado de viñas y bodegas. Ese bienestar ha de propagarse sin duda a la economía general del país, ya que la industria del vino es fuente de ocupación y trabajo de muchas otras actividades.

La mecanización en los cultivos, la electrificación de los predios rurales y bodegas, los

transportes automotores y ferroviarios, los equipos de fraccionamiento y lavado de botellas, la industria tonelera, la fabricación de botellas y corchos, las destilerías de alcoholes vínicos, etcétera, giran alrededor de la industria vitivinícola y progresan con ella

Para concluir, deseo destacar que inquieta a mucha gente de Cuyo el hecho de que el Senado haya agregado esa disposición sobre los vinos regionales para ciertas provincias como las de La Rioja, Catamarca y Salta. Pero quiero señalar, como lo hizo el señor diputado Suárez, que esa disposición se aplicará sólo a los vinos producidos y fraccionados en la zona, lo que no significa ningún privilegio.

Por otra parte, el artículo 8, inciso n) del proyecto, establece que ninguna resolución del Consejo Directivo podrá establecer o conservar o crear privilegios de una o más zonas respecto a otras. Es decir, como lo señalara el señor diputado por Mendoza, no se trata de privilegios, sino de fomentar la industria en esas provincias.

Considero que la sanción que vamos a dar hoy creando el Instituto Nacional de Vinicultura permitirá que dentro de muy pocos años nuestros vinos sean degustados en otros países, y que la vitivinícola sea una industria que enorgullezca al país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Cortés. — Las enjundiosas exposiciones que se han hecho en esta Cámara sobre la vitivinicultura y los datos estadísticos, evidentemente ciertos, que se han proporcionado, me evitan el insistir en los mismos argumentos, para demostrar que el proyecto de ley puede ser beneficioso para la industria vitivinícola y para el país.

Pero como ex presidente de la organización de bodegueros más importante que existe en el país, conozco a fondo el problema que se debate hoy, y creo que esta ley no va a resolver el grave problema de la vitivinicultura en el aspecto principal, que es la adulteración del producto. El país necesita de una vez por todas la ley que de alguna forma impida la adulteración del vino en defensa del consumidor argentino. Este es el punto esencial que más nos debe preocupar.

En esta Cámara, y en repetidas oportunidades, se ha hablado de infraproducción, de superconsumo, o viceversa. Yo diría que si fuéramos a analizar con tranquilidad los datos estadísticos del consumo argentino *per capita* y la producción vitivinícola del país en sus distintos tipos, notaríamos que no hay exceso de producción. Mas el problema no surge propiamente del consumo de los vinos genuinos, sino del manipuleo posterior de los mismos, ya sea en las regiones de consumo o ya, en muy pocos casos,

en las propias zonas de producción. Con esto quiero decir que el problema es absolutamente distinto al expuesto.

Sr. Fossati. — Si me permite el señor diputado...

Descartaría que el señor diputado aclarase algo que no entendí bien. Sostiene que en el país no hay superproducción de vinos, pero que el consumo *per capita* es muy elevado.

Existen países en el mundo, como Francia, y también Italia, donde el consumo *per capita* es mucho mayor que en el nuestro. Y, aunque sea en otro orden de ideas, se ha observado allí que el alto consumo *per capita* provoca una disminución del alcoholismo. Querría conocer la opinión del señor diputado a ese respecto y saber si su observación respecto a la Argentina la hizo con sentido de crítica o no.

Sr. Cortés. — Como ha dicho el señor diputado preopinante, hay naciones donde el consumo *per capita* de vinos es mayor que en la República Argentina; tal sucede con Francia y con Italia. Pero, en nuestro país, con fuerte afluencia inmigratoria de aquellas naciones, como también de España —donde el consumo *per capita* de vino es igualmente elevado—, tenemos un alto índice de consumo.

Lo que quería significar es que no se producen crisis en esta industria por falta de relación entre el proceso de la vitivinicultura en función de producción, y el consumo, sino que el exceso se produce por la acción de intermediarios entre el productor y el consumidor. Hay un estiramiento de los vinos que, precisamente, han logrado extirpar en esos países.

En las zonas de gran consumo, como la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, se ignoran todas las exigencias que debe soportar el productor vitivinícola desde la labranza de la viña, hasta la colocación de su producto en el mercado. El consumidor habitual no sabe distinguir entre la exigencia de brindar un producto genuino que conserve todas las características organolépticas, y ofrecer un producto cualquiera, con cualquier marca, sin pretensión ni responsabilidad.

Mendoza y San Juan no son, como algunos creen, zonas donde los viñedos se obtienen por generación espontánea, donde simplemente se haya sembrado aprovechando del buen tiempo y sin tener que soportar fenómenos climáticos adversos. La producción vitivinícola cuyana es un cultivo intensivo que ha tenido por base un gran esfuerzo de pioneros que han luchado en el laboreo de la tierra, quitándola incluso a las zonas destinadas para la cría de ganados o transformando el erial en un verdadero oasis. Es gente que no ha sabido de tiempo en el trabajo, que no ha escatimado sacrificios, ni ellos ni sus familias; que han permanecido

en el campo a pesar de la inclemencia y de los inconvenientes del agro inhóspito, en zonas donde no se puede trabajar sino sobre la base del riego artificial. Todo esto lo han soportado, para convertirlas en las zonas de producción y de sustentación de una de las industrias principales del país. Esta gente que, como digo, lo ha soportado todo, y que en su mayor parte es consecuencia de inmigraciones que, aun desconociendo el idioma, afrontaban el trabajo en zonas que no les eran propicias, no fue la que ha adulterado los vinos. No podía serlo, pues todo era la consecuencia del esfuerzo suyo y de sus familiares, que debían defender.

Es necesario decir todo esto, porque los consumidores creen generalmente que el vino es un producto de obtención fácil, de elaboración casi espontánea, y del que cualquier sucedáneo puede hacer el simil con beneficioso resultado. Por eso, cuando se defiende a la gente que ha prestado todo su esfuerzo y ha logrado estos verdaderos oasis para la vitivinicultura, no se hace más que rendir el justo homenaje a sus muchos años de largas luchas y sacrificios.

El vino así producido tiene que llegar al consumidor. Pero, ¿qué pasa en el país? Ocurre que en materia vitivinícola existe el intermediario, que ha hecho una verdadera organización monopolista, por la cual el vino, en lugar de pasar directamente del industrial al consumidor, tiene que someterse al fraccionamiento. Recuerdo que hubo épocas en que los propios industriales sanjuaninos y mendocinos, y aun de Río Negro, no podían ser fraccionadores y llevar el producto al consumidor, puesto que para ello necesitaban que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, les diera las cuotas de exportación. Esas cuotas anduvieron en manos de negociadores, hasta de corredores de bolsa y boxeadores, y en un momento dado liquidaron la política vitivinícola seria que se perseguía desde otros sectores.

Parece imposible que digamos estas palabras en un país como el nuestro, en el que la Constitución asegura la libertad de comercio y en el que, no obstante, los propios productores no podían llegar con aquello que es el fruto de su sacrificio y de su esfuerzo al consumidor, porque tenían que entregarse al intermediario por imperio de un gobierno dictatorial que ejercía la superintendencia sobre la voluntad de los industriales. Vale decir que había industriales que no podían fraccionar sus productos y que se veían obligados a entregarlos a quienes indicara aquel gobierno. Incluso había industriales que no podían sacar sus productos de los límites de su provincia.

En este problema de la crisis vitivinícola no hay que echar la culpa al hecho de una superproducción ni a un infraconsumo; la culpa está en los aspectos que he analizado. Incluso en un régimen vitivinícola de proporciones, para el

país, es necesario tener los vinos finos y de reserva, y no se debe comerciar la cosecha del año. En una organización vitivinícola racional, las cosechas se deben comerciar de un año para el otro, aun para los vinos comunes. Es cierto que en el país no hay suficiente capacidad de bodegas, pero este problema se pudo ir solucionando paulatinamente, ya que tiende a la defensa del consumidor.

Voy a hacer una cita importante que demuestra hasta dónde el problema de la industria vitivinícola argentina no encuentra su cauce, porque parece que siempre la legislación se ha olvidado de algún aspecto fundamental.

Grandes organizaciones industriales de Mendoza, bodegas cuyo nombre no voy a dar, pero que conocen todos los consumidores del país, no obstante tener sus plantas de fraccionamiento en la Capital Federal, se han visto obligadas a cerrarlas por la competencia ruinosa que le hacían los fraccionadores de la Capital Federal y zonas aledañas. Pregunto si es posible admitir tal hecho. Vez pasada, argumentando sobre esto que parece grotesco, decía que el caso podría compararse a si Henry Ford trajera al país automóviles para vender, y aquí hubiera quien vendiera esos mismos automóviles a un precio tan barato que obligara a Ford a embarcar los suyos de regreso a Norteamérica, seguramente que ese señor hipotético que vendería los automóviles Ford en el país debería hacerlo con algunas piezas de menos. Tal es el caso de los fraccionadores de vinos, que obligan a las grandes organizaciones industriales, que tienen acreditada su responsabilidad, su reputación, a cerrar sus plantas de fraccionamiento porque el vino de plaza es de inferior precio. Yo diría a los consumidores que lo que están tomando no es vino, o es vino de inferior calidad. Esa es la pura verdad. Entonces necesitamos dictar una ley, sin perjuicio de que ésta trate en todo lo posible de encauzar las normas al campo de la rectitud. Necesitamos algo más: defender el prestigio y el nombre de nuestra industria, asegurando que el vino llegue del productor al consumidor, pero defendiendo al productor, no poniéndolo, incluso por la misma ley, en igualdad de condiciones, como si el vendedor fuera un individuo identificado con la industria.

¿Qué ocurre, señor presidente? Pasa una cosa muy sencilla. Cuando vienen los períodos de crisis, en uno u otro sentido —y qué industria y producción no los tiene—, resulta que los productores, que son quienes están afincados en la zona y han colocado todos sus bienes en la industria, se ven obligados a soportar la crisis. ¿Y qué pasa con los fraccionadores? Estos siguen fraccionando; pero vino, no. Ya no fraccionan vino, sino cualquier otra cosa: manzanas, cebollas o cualquier otra cosa, u otra bebida gaseosa. Esa gente que interviene en el proceso,

pero en el aspecto comercial no está identificada con el esfuerzo que representa una industria poderosa, que defiende en gran parte la economía del país. Entonces es golondrina en el negocio. Cuando el verano se va, ellas también se retiran del mismo.

Nosotros tenemos estas condiciones de producción e industriales en todo el país. No solamente en Mendoza, San Juan, La Rioja, Río Negro está enquistado el intermediario, que no deja vivir al productor. Ese es un problema que no es únicamente vitivinícola. Afecta a todos los aspectos de la actividad útil del país. Ese intermediario se presenta en distintas formas, en organizaciones civiles y comerciales. Mientras no sepamos dictar una ley que los ponga en el lugar que corresponde, dignificando al productor y estableciendo que el intermediario, aquel que compra para vender, no es el factor más importante en el proceso económico del país, sino una simple etapa comercial, la economía nacional no podrá ir adelante, porque incluso la macrocefalia de la Capital Federal, donde están reunidos los grandes intermediarios, se irá agravando, ya que es aquí donde se manejan los grandes intereses económicos de las provincias argentinas.

El productor no puede hacer otra cosa que tratar de defender el esfuerzo de su trabajo. El Estado, mediante sus leyes y su organización, debe salir en su defensa y la del consumidor frente a los intermediarios. Por eso, no soy partidario de la economía totalmente libre. Soy partidario de la economía libre en algunos aspectos, pero dirigida en otros. Es indudable que así como se acepta en materia de trabajo el contrato colectivo para defender a los trabajadores contra la fuerza del capital, tenemos que aceptar también que la única forma de defender a la población, y al productor en algunos aspectos fundamentales y esenciales de la vida, es haciendo intervenir al Estado.

La intervención del Estado está inspirada en el propósito de fijar medidas que signifiquen establecer precios razonables y asumir el papel de defensor del pueblo. Con este objeto, el Estado debe actuar también como competidor para que la gente pueda comprar las cosas a precios que no resulten excesivos; en una palabra, el Estado, al intervenir para corregir el abuso, puede hacerlo como un ofertante más, cuyas ofertas redundarán en beneficio del pueblo. Vale decir que en todas las cuestiones fundamentales que hacen a la esencia de la economía del país —y por qué no ha de ser también a la vitivinicultura— existe el problema de que entre el productor y el consumidor está el intermediario que se enriquece en forma alarmante. Tenemos así, en este aspecto de la vida económica de la Nación, que ha sucedido que, mientras los productores estaban angustiados por la des-

esperanza de no poder vivir, ya que se les pagaba poco o nada por su producción, el consumidor debía adquirir a precio de oro esas mismas cosas, que sólo servían para enriquecimiento de un grupo de intermediarios.

Del análisis de esta actuación de los intermediarios, podemos concluir que el Estado debe intervenir para defender al productor y al consumidor y salvar la economía argentina de un proceso de deformación que se ha hecho carne en todos los ciclos económicos.

Señor presidente: yo creo que el problema de la vitivinicultura tiene dos aspectos fundamentales. No se trata simplemente de buscar más lugares para plantar vid; no se trata de diversificar ni intensificar los viñedos por todo el país. En mi concepto éste no puede ser un problema para este vasto territorio ni desde el punto de vista geográfico ni desde el punto de vista de sus condiciones climáticas en función de la economía. Considero que no se necesita que cada provincia haga vino ni críe sus vacunos o se dedique a producir todo lo que le es necesario, para traer después su producción regional al mercado. No podemos olvidarnos de que siempre está la mano fraternal de una provincia a otra.

Entiendo que lo práctico y razonable es cultivar y producir las cosas en el lugar donde se den mejor; en esta forma obtendremos los precios más bajos de la producción, y favoreceremos un mayor consumo, precisamente por el hecho del menor costo de producción.

Además no se trata sólo del aharratamiento del producto, en este caso, del vino. Se trata también de producir buen vino y a bajo precio.

Esto se puede conseguir actuando en forma honesta en la industria; haciendo los cultivos —los cepajes— en los lugares donde tengan más facilidades para vivir y desarrollarse. De este modo los gastos de cultivo no serán superiores y no habrá necesidad de imponer un precio elevado.

Yo pregunto qué pasa con los viñedos en ciertas zonas de nuestro país. No pasa nada más que una cosa: que la uva, que es la base y esencia del producto, no es de la calidad que se requiere, y de ahí que resulte un vino de inferior calidad. Ningún productor europeo piensa elaborar vino bueno con mala uva, y por eso se dedica a cultivar uva que le permita producir sus vinos de marca, uno de esos productos que son tan conocidos por su nombre regional en los países europeos. Entre nosotros vemos también esos tipos de vino que no son meras imitaciones, sino, muchas veces, buenas imitaciones. Mas ocurre también en nuestro país, que en algunas zonas la uva que se obtiene no es precisamente para elaborar buen vino. Se han plantado viñedos en regiones en que resulta costoso el cultivo frente a la producción en Cuyo o en Río Negro. Todo eso encarece el precio del producto e incide so-

bre el consumidor, que debe pagar un vino caro, porque se quiere proteger a los productores que se han instalado en zonas inapropiadas.

Por eso insisto en que creo que no es una necesidad hacer cultivos en ciertos lugares del país, cuando el producto se da mejor en otras regiones.

A veces, por razones de orden internacional, puede constituir una necesidad dedicar los esfuerzos a una producción propia, aunque el costo resulte superior; pero no creo que deba generalizarse el procedimiento entre las provincias, cuando sea posible llevar a cada zona a producir el producto de más fácil cultivo. Esa es la base esencial.

La vid necesita su lugar, lo mismo que la ganadería. Así, un ganadero que quiera ejercer su actividad en Mendoza va a encontrarse en situación de enorme desventaja con otro de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, porque tiene que crear campos de pastoreo artificiales y realizar una serie de procesos para suplantar la adecuación al lugar geográfico en que debía realizarse esa producción. Así como los pastos de las regiones aptas para la ganadería son mejores y más fáciles de obtener, lógicamente el producto, como consecuencia de esa circunstancia, también tiene ventajas, de producción y de costo.

Lo mismo sucede con la vid. ¿Entonces, por qué hay tanto interés en plantar viñas fuera de las regiones aptas? Sencillamente porque eso permite el manipuleo al margen de las inspecciones locales y al margen de la conciencia que los mismos productores regionales se han formado de la necesidad de producir el mejor vino posible. Esa es la verdad.

Un legislador en el Senado de la Nación protestaba porque al vino de San Juan se le exige una graduación alcohólica del 12,80; yo le diría a ese señor senador, que es amigo mío, que ha hecho bien de protestar ante esa exigencia de graduación alcohólica, pues la razón de ello reside actualmente en que el exceso de alcohol permite el manipuleo de los vinos. Por eso es que se ha querido establecer que cada vino venga con la especificación de la región de procedencia.

La verdad es que hay gente que quiere plantar viñedos fuera de la zona de producción, porque hay menos control; en esas regiones no hay tantos inspectores, y si los hay, puede suceder que algunos tengan la vista un poco cansada y no observen las irregularidades.

Sr. Suárez. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Cortés. — Si, señor diputado.

Sr. Suárez. — El espíritu de la ley al no establecer zonas de privilegio era el de respetar una norma constitucional, entendiendo que los propios productores se irían ubicando en las zonas en que las necesidades del consumo lo de-

terminaran. En ese sentido creo que el señor senador a que se refiere el señor diputado comete un error, porque será la propia comisión ejecutiva de esta ley la que irá determinando las calidades de los vinos y exigiendo su tipificación. Los vinos de exportación lógicamente provendrán de las zonas óptimas, como las de Mendoza, San Juan, valle de Cafayate, e inclusive Catamarca.

Lo que también considero un error es tratar de arreglar la naturaleza, porque en España, por ejemplo, se producen grandes vinos de alta graduación, pero son mejores los de Francia, que son de baja graduación alcohólica. Pero todo esto se irá corrigiendo por el consejo que tiene facultades al respecto. Estimo que se confunde la interpretación que dio el señor senador a la ley, porque no se trata de crear una división tajante, sino de suspender una corruptela que existió en época de crisis de producción, donde en realidad se hicieron algunas maniobras.

Sr. Cortés. — Yo no creo que a ninguna región se le pueda poner un determinado tenor alcohólico al vino, porque él depende de la época en que es cosechada la uva y de sus variedades. La graduación alcohólica del vino no depende simplemente del lugar donde se produce la uva, aunque por tal motivo haya a veces diferencias de graduación, sino también de tiempo de la cosecha de la uva.

Se puede dictar una reglamentación muy severa, que obligue a producir vinos alcohólicos de cierto grado, defendiendo al consumidor de la pretendida falta de honradez de los productores pero yo pregunto: ¿en qué medida y con qué sentido se analizan los vinos de baja graduación que se venden en la Capital Federal —que a veces no alcanzan a 11 grados— y de dónde salen esos vinos?

Si la provincia de San Juan produce por ley a 12,80 grados; Mendoza a 12,30 grados, también por ley; Río Negro, más o menos; si la zona de La Rioja produce vinos de 13 grados o más, ¿de dónde sale entonces el vino de 10 grados que se expende en la Capital Federal? ¿Con qué se cortan los vinos para llegar a esa baja graduación alcohólica? Me anota un señor diputado, con gran sutileza: de Avellaneda. Pero esos viñedos no los conocemos.

En esto está el meollo de la cuestión: ¿Cómo es posible, pregunto yo, que gente que entiende el problema, que sabe cómo se actúa en el proceso de la vitivinicultura, pueda venir a las reparticiones oficiales a solicitar la comercialización de vinos de diez grados? Ese vino existe y se consume.

Cuando el bodeguero, en el proceso de elaboración —aunque para él nada signifique—, se ve precisado a usar la manguera para lavar la moledura, y con ello queda un litro de agua, cualquier inspector que lo sorprenda podrá hacerle un sumario de quinientas fojas; pero aquí,

donde parece que se usaran mangueras de bomberos para obtener vinos sin procedencia, no existe ninguna cortapisa para evitarlo.

Los vinos comunes hechos con uvas como la francesa y la criolla, que cuando maduran bien son de alta graduación, son los que salen de las provincias productoras con 12,80 o 13 grados cubiertos y después se transforman aquí en vinos de 10 grados. Es necesario investigar esto. El día que hagamos esta investigación veremos cómo el público argentino consume vino bueno y genuino.

Vuelvo al punto de partida, esto es, al aspecto de la comercialización del vino.

Hay personas que actúan en la comercialización de dicho producto, y que obtienen pingües ganancias, porque actualmente se les permite manipular el vino que compran a los productores; al fraccionarlo, obtienen como beneficio sumas importantes, con la desventaja de que se desnaturaliza el producto. Todo esto lo consiguen a costa del pueblo argentino.

Nosotros estamos frente a un problema gravísimo, el de los intermediarios en esta gran industria, que está provocando la crisis de las provincias vitivinícolas.

Yo creo que la ley debe contener disposiciones que aseguren la responsabilidad de los productores y den garantías al pueblo consumidor, de la genuinidad del producto, eliminando de una vez por todas a las personas sin escrúpulos que manipulan el vino desmejorándolo. El fraccionamiento de los vinos debe hacerse por el productor, en el lugar de origen o de consumo.

Fraccionar el vino no es lo mismo que cortar una tela. Un comerciante de géneros puede cortar una pieza, y la calidad no se altera, pero para fraccionar el vino se necesitan determinadas condiciones.

El fraccionamiento no es simple, porque hay que salvar muchas dificultades de carácter técnico. El fraccionamiento debe estar asegurado no solamente para defender al industrial, sino también al consumidor.

Hemos podido observar en las ventas producidas en la Capital Federal, que la gente abandona el hábito de tomar vino, quejándose de que les hace daño, que le produce acidez, que tiene mal gusto, etcétera. Hay una gran prevención contra estos productos de la industria argentina. ¿De dónde nace ella? No de los productos de las firmas responsables, sino de otras firmas que actúan con mucha propaganda y que en realidad no se conocen. Rotulan a los vinos con diversas marcas, y todos son productos malos. Así, por ejemplo, recuerdo en este momento la cantidad de marcas de vino anónimas en la industria, que van contra el bolsillo y la salud del consumidor.

Por eso creo que esta ley debe establecer de una vez por todas la necesidad de la defensa de

los intereses del mismo. El consumidor argentino está acostumbrado a tomar vino en las comidas, hasta constituir ello una necesidad tan importante como un plato de las mismas. Tenemos que defender a ese consumidor, no sólo en el precio, sino también en la calidad, porque un peso más o menos no le significará mucho, pero sí pueden ser serias para él las consecuencias de la adulteración.

Debemos evitar que caiga en manos de esos intermediarios sin responsabilidad que fraccionan vinos sin ser auténticos productores. Debemos conseguir lo que se ha obtenido en otros países, donde se puede decir que se toma vino de tal o cual bodega, y esa bodega hace méritos de su marca, fabricando un legítimo y buen producto.

En este aspecto tengo que hacer una pequeña reprimenda al consumidor argentino, especialmente al de la Capital Federal. Elige siempre el vino más barato, sin saber que el almacenero trata de vendérselo preferentemente, porque con ese producto tiene más margen. Pero se trata de un vino adulterado, lo cual permite venderlo a un precio menor. La gran bodega y el productor fraccionador serio no rebajan sus precios para conquistar mercados en cualquier forma, pues no tienen tampoco la defensa de estiramiento; venden entonces unos centavos más caro y dan una prima menor al comerciante por vender sus productos nobles.

De manera que si queremos hacer algo serio en materia vitivinícola para defender al consumidor, debemos lograr que no pueda consumir otros vinos que el que venden los productores, y que todo el proceso de fraccionamiento, hasta la vasiya más pequeña, sea realizado por el mismo productor.

Se afirma que los productores no podrán dar abasto. Mas no es cierto. Hay una cantidad de bodegueros en Mendoza, San Juan e incluso en Río Negro que no instalan sus plantas de fraccionamiento en esta Capital porque saben que no pueden resistir la competencia desleal. Y aún más: sabiendo que importantes firmas, ya establecidas con grandes plantas de fraccionamiento, han tenido que cerrar sus puertas porque no pudieron resistir esa competencia.

Quiero ahora referirme a un aspecto particular de la ley, en cuanto a la representación de los fraccionadores. No comprendo cómo en una ley de esta importancia se concede representación a comerciantes en vinos cuando hay fraccionadores auténticos que comercian el vino directamente desde su planta de producción. En una palabra, se va a dar personería a gente que es la autora de este drama de la vitivinicultura, que también perjudica al consumidor.

Cuando fui elegido diputado nacional se me pidió que hablara sobre estos aspectos de la vitivinicultura. Expuse mi punto de vista en algunos diarios, especialmente un pensamiento, ya

viejo en mí, en cuanto a que la Dirección General de Vitivinicultura estuviera en los lugares de producción. Afirmaban esta solución varios aspectos; entre ellos, la defensa de la industria desde el propio lugar de producción. Es indudable que los hombres que viven en las regiones vitivinícolas conocen con mucha mayor perfección las situaciones por las que puede atravesar la vitivinicultura en el país: falta de relación entre el consumo y la producción, y sus causas; los problemas inherentes al precio; circunstancias determinantes de que el vino sea uno de los pocos artículos de consumo que, comparativamente, casi no han aumentado, en medio de la inflación que nadie puede negar; etcétera.

Es necesario, pues, que la repartición estatal respectiva funcione en las zonas de producción, para que tenga sentido cabal de lo que esta industria significa y para que comprenda cómo deben ser defendidos miles de argentinos que viven de esa actividad.

Con esa solución se atiende también al gran problema de racionalizar la burocracia. No se trata de llevar gente de un lugar a otro, sino de atenuar el problema demográfico dado por la macrocefalia actual, reflejado en un presupuesto nacional estructurado de esa manera con una gran cantidad de organismos impropiamente asentados en la Capital Federal. Se trata, en síntesis, de instalar las reparticiones en el propio campo de batalla, diremos así, donde se desarrollan los procesos productivos.

En general, debe reconocerse que el texto actual de la ley es mejor que el anterior. Pero de acuerdo con lo que he manifestado, será preciso instituir preceptos normativos que den agilidad y firmeza a la acción para evitar el dolo. Tal vez, no lo encontraremos donde lo estamos buscando: estamos yendo casi exclusivamente a la fuente de producción cuando pienso que tenemos que ir a los centros de consumo, para hallar el dolo.

Toda esta situación que expongo sobre la industria vitivinícola no es nueva; es por demás vieja. Todas las crisis atribuidas a la superproducción vitivinícola se originaron, en realidad, en el proceso de adulteración de los vinos hecho fuera de las zonas de producción. El productor que vive allí, en las zonas vitivinícolas, se cuida mucho de cometer transgresiones, porque compromete su prestigio y toda su economía. La gente que vive fuera de esas zonas no se guía por otro elemento que el positivo de obtener la ganancia y correr presuroso tras ella.

Por otra parte, creo que inmediatamente debemos abocarnos al estudio de un aspecto fundamental en este asunto de la vitivinicultura: me refiero al fraccionamiento de los vinos. Debemos establecer quiénes pueden y quiénes no pueden fraccionar, cómo debe hacerse el fraccionamiento, todo con el fin de evitar muchas

de las consecuencias que puntalicé. Se trata, en síntesis, de dar con la ley los elementos que permitan la defensa de una gran industria con cuya actividad viven miles de argentinos y de cuyo resultado debe beneficiarse toda la población, que tiene el derecho de beber en el país vino genuino. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Castillo. — Señor presidente: había pensado que la oportunidad de tratarse esta ley de vinos era el momento preciso para rendir homenaje a todos los trabajadores y productores que de una u otra forma están vinculados a la industria del vino. Con tal motivo recopilé datos y antecedentes, pero en esta Cámara se ha establecido ya, con profusión de cifras, el valor e importancia de esta industria.

Se han proporcionado estadísticas de las hectáreas plantadas, de los productores, de las bodegas y de las industrias subsidiarias que están vinculadas a la industria madre. De modo, pues, que insistir en ello, para demostrar la importancia de la industria vitivinícola para las provincias de Cuyo y otras en las que recién empieza a desarrollarse, sería incurrir en una repetición. La escasez de tiempo, dadas las sesiones que nos quedan, nos obliga a ser moderados, razón por la cual sólo me limitaré a dos o tres citas que considero fundamentales respecto de la ley que va a sancionarse.

Creo que el real valor que va a aportar la ley está referido a los beneficios que garantizará a los agricultores, que son los primeros productores expuestos a las dificultades de una agricultura, como la viña, de carácter sumamente delicado y perecedero. Está afectada por una cantidad de factores climatológicos que mantienen en constante zozobra a individuos que a lo largo de los años no descansan en su trabajo ni un par de horas, pensando en lo que puede sobrevenir a último momento. En la zona de Cuyo es común, durante los meses de octubre hasta marzo, ver a los agricultores observando permanentemente el cielo y comentando las dificultades que el tiempo puede acarrear respecto de una buena cosecha, o los desastres que pueden acontecer de producirse alguna de las llamadas plagas climatológicas.

Toda esta tarea de los agricultores, que desemboca en el trabajo de las bodegas y que después se transforma, a través de la comercialización, en el producto de uso común, hace imprescindible que garanticemos se haga en la forma más lícita y que se asegure también la genuinidad del producto, que es lo que en última instancia requiere el consumidor.

Quiero referirme a la industria paralela y a las consecuencias sociales que la vitivinicultura ha promovido en Cuyo. Por esta ley se crea el instituto que va a fomentar ese desarrollo en

forma eficaz y se promueve la investigación que es indispensable ejecutar de una vez por todas, con seriedad y pujanza.

A pesar de lo que se haya hecho y adelantado desde hace muchísimos años, más o menos se viene trabajando en la misma forma. No se han efectuado investigaciones sobre nuevos tipos de plantaciones ni sobre características ecológicas de rendimiento, como existe en Francia, donde con exactitud catastral se tienen determinadas las zonas más eficaces y aptas para los distintos tipos de plantaciones. Hacen falta también nuevos métodos de producción para obtener una mayor eficacia. Nosotros no tenemos hasta la fecha estudios técnicos de cómo se podrían aumentar los cultivos, que se siguen trabajando y abonando en la misma forma en que lo hicieron nuestros abuelos al fundar esta industria.

Es evidente que hace falta una mecanización completa del agro en la zona vitivinícola. Hace falta incrementar la producción de abono en el país, ya que se necesita recurrir a la importación, lo que irroga una gran cantidad de divisas anuales.

Pensamos que es posible que a corto plazo se produzcan en el país abonos de alta calidad con los subproductos del petróleo, de los que por casualidad también disponemos en abundancia en Mendoza.

También abrigamos la posibilidad de que esta industria poderosa provea a sus mismas necesidades mediante la fabricación de las maquinarias agrícolas que hasta la fecha no se hacen en el país.

Para asegurar los beneficios de la producción hace falta que se investigue a fondo el modo más técnico y efectivo de realizar el riego de la vid, que se viene efectuando desde la época en que, según la historia, el cacique Guaymallén derivó el primer curso de agua ~~para hacer~~ el riego artificial en la zona de Cuyo. Hasta la fecha, y a pesar de todos los avances que en esta materia se han realizado, estamos sumamente atrasados con respecto a las demás naciones del mundo que trabajan esta industria. Mendoza es la primera provincia que se ha desarrollado más en este tipo de labor.

Tenemos también la posibilidad de realizar una gran electrificación rural. Reiteradamente se han expuesto en esta Cámara los beneficios que significan para la tecnificación de la agricultura contar con la energía eléctrica que, a la vez, permite la radicación de los individuos en medios cómodos similares a los de las ciudades. Simultáneamente, la fabricación de maquinarias eléctricas significará la creación de fuentes de trabajo.

Partiendo desde la explotación de la vid hasta llegar a la venta final del producto, la vitivinicultura constituye una de las industrias más evolucionadas del país y del mundo. Las provincias de Cuyo, en las que esta industria se

halla altamente desarrollada, tienen hoy un tipo de trabajador, de empresario y de comerciante cuyas características emprendedoras los destacan en relación a los de otras zonas.

Pensando que la ley que vamos a votar garantiza todo un movimiento económico de progreso, quiero rendir un sincero homenaje a los hombres que han puesto su esfuerzo y su sacrificio al servicio de la grandeza de esa industria en la zona cuyana.

La radicación definitiva del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la zona de Cuyo es un acto de justicia. A través de este organismo se establecen las condiciones necesarias para que la industria progrese cada vez más, en la mejor forma posible y de acuerdo con la técnica más moderna.

Confío, señores diputados, que con la sanción de esta ley daremos el instrumento legal adecuado y contribuiremos en forma eficaz al desarrollo de una industria que por su esfuerzo y sus padecimientos bien merecidos lo tiene (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Oreja. — Señor presidente: en el período anterior de sesiones, al tratarse la ley general de vinos, los representantes de algunas provincias hicimos una serie de objeciones al considerársela en particular, sin lograr, empero, que la comisión las aceptara.

El traslado de esta iniciativa al Senado originó, en el curso del presente período, un agitado exhaustivo debate, que adquirió por momentos un tono polémico.

En mi carácter de representante de la provincia de Río Negro, productora de vid y elaboradora de vinos, señalé en aquella oportunidad, respondiendo a la posición de los interesados en la materia y a las necesidades generales de la economía de la provincia, la necesidad, a nuestro juicio, de modificar dos aspectos que se refieren a la estructuración del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Uno de ellos se vincula con la sede y, el otro, con la integración de su consejo directivo.

Estas objeciones no responden a un simple propósito de observación, sino a la necesidad que tenemos de advertir que tanto la fijación de la sede del instituto como la integración de su consejo directivo no debían crear factores de predominio de una zona productora respecto de otra.

El debate producido recientemente en el Senado y algunas modificaciones formales introducidas en estos aspectos hacen que nosotros, en esta instancia, no insistamos en aquellas observaciones. Tenemos que decir, sin embargo, que en la iniciación de la consideración de esa iniciativa, cuando se la trataba en el seno de la comisión, obtuvimos que se eliminara uno de los factores que considerábamos más peligroso para las perspectivas futuras de la indus-

tria vitivinícola: el otorgamiento al instituto de facultades reguladoras.

No podemos olvidar, señor presidente, que durante la vigencia de la política reguladora en la provincia de Río Negro, que se encontraba en la etapa inicial del cultivo de la vid y de la elaboración de vinos, la facultad reguladora, que llegó a limitar y hasta a sancionar la expansión de los cultivos de la vid, creó condiciones que conspiraron contra el desarrollo de la industria.

Sr. Suárez. — Si me permite el señor diputado...

Comparto el criterio del señor diputado, pero no quiero dejar pasar la oportunidad sin hacer una aclaración con respecto a esta cuestión, porque creo que se comete una pequeña injusticia, aunque entiendo, desde luego, que ello está lejos del ánimo del señor diputado por Río Negro.

La ley fue mala y afectó también los intereses cuyanos porque impidió el desarrollo de la industria en todo el país. No estableció esa ley un criterio diferencial con el objeto de beneficiar una zona determinada, sino que implantó una mala política que perjudicó a todas las zonas productoras.

Quiero dejar aclarado, entonces, que comparto el criterio del señor diputado, pero con la aclaración que acabo de hacer.

Sr. Oreja. — Así es, señor presidente; pero, evidentemente, los resultados de esa política no pueden ser los mismos para una provincia como es Mendoza, con un grado de expansión en la industria muy avanzado, que para otra que, como Río Negro, se encontraba en los comienzos de la etapa de desarrollo vitivinícola. Pero estos son conceptos sobre los que ya se ha insistido con suficiente fundamento.

Yo deseaba únicamente decir que Río Negro, como las demás provincias de menor producción, aspiran a intensificar su área cultivada y a proseguir en la tarea de elaboración de vinos de superior calidad. Por eso quiero destacar mi complacencia por el hecho de que en este debate se ha puesto el acento sobre la necesidad de defender la calidad y genuinidad de la elaboración, porque entendemos que precisamente la crisis de la industria del vino, no radica tanto en el volumen de la misma, como en su calidad y en su autenticidad.

En lo que se refiere al instituto que se crea, aspiramos a que no se convierta en un pesado organismo burocrático, sino que sea una entidad de dirección técnica y administrativa que fomente y respalde la industria del vino sin predominios de una zona con respecto a otra. En cuanto a este concepto, me complace destacar que el inciso n) del artículo 8º expresa textualmente: «Ninguna resolución del consejo directivo podrá conservar, establecer o crear privilegios de una o más zonas respecto de otras.» Creo que esta disposición es suficiente garantía

para que no se produzca la situación que señalamos.

Lo que decimos de Río Negro con respecto al cultivo de la vid y de la industria del vino no es un hecho aislado ni parcial; ha ocurrido también en otros rubros de la producción. De ahí la necesidad que tenemos de formular estas advertencias, sin que ello signifique el anticipo de cargos con respecto a alguna zona determinada. Sabemos, y alguna vez tuve oportunidad de exponerlo, que en la provincia de Río Negro, hace más de veinte años, en la zona de General Conesa, hubo una importante área plantada con remolacha azucarera y estaba instalado un ingenio para la fabricación de azúcar de remolacha. Lamentablemente, por aquellos años la ley respectiva y el imperio de intereses de zonas en las cuales la fabricación de azúcar de caña ejercía un evidente predominio, hicieron que aquella iniciativa fracasara. El ingenio fue desmantelado, se lo despojó de la maquinaria, se inutilizó el tramo de la vía férrea que se había extendido desde Vintter hasta General Conesa, y toda aquella posibilidad de expansión de la economía en el Sur y de la diversificación de la producción, quedó eliminada. No queremos que fenómenos como éstos vuelvan a ocurrir en el país.

Ha dicho bien el señor diputado Cortés que no se trata de lanzarse a una lucha competitiva de producción y de elaboración en zonas que no estén dotadas por la naturaleza, y por los factores económicos, de las condiciones necesarias para que esa producción y esa elaboración tengan un alto desarrollo y una eficiencia económica a tono con los intereses del país. Pero si se trata de que respecto de la experiencia dolorosa que en esta etapa de la expansión inicial he señalado, se haga también la experiencia necesaria para que pongamos en este caso, en la defensa de la calidad de la industria, de la honestidad de la comercialización y de la limitación y prohibición de maniobras de adulteración que aquí se han señalado, todo el énfasis y la autoridad necesaria para evitar la repetición de maniobras de esta naturaleza.

Los cultivadores de vid de la provincia de Río Negro, por las características climáticas de la zona, han venido sufriendo una serie de detrimentos de honda gravedad. En la presente temporada la producción de vid en la provincia se perdió casi totalmente debido a una helada tardía. Este fenómeno lamentable coincidió con una etapa de depresión en la comercialización de la fruta y de falta de precios para la fruta de exportación, todo lo cual produjo como consecuencia un serio trastorno en la economía de esta zona frutícola y vinícola. Por ello, como representante de la provincia de Río Negro y haciéndome cargo de las lógicas aspiraciones de otras zonas, he señalado estos conceptos sin otro ánimo que el de formular en el tratamiento en general de este proyecto de ley un voto vehe-

mente en el sentido de que todas las zonas productoras de vino del país se unan en el común anhelo y en el fundamental propósito de defender la autenticidad de una producción que constituye un orgullo para el país y uno de los rubros más fundamentales de su economía. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Moreno. — Señor presidente: como representante de la provincia de San Juan, gran zona productora de uva, que cuenta con establecimientos vitivinícolas de gran importancia por su capacidad y sus adelantos técnicos, quiero dejar constancia de mi voto afirmativo de esta ley de vinos que se trata en la Honorable Cámara. Seguramente el despacho tendrá el voto favorable de este cuerpo, ya que ha sido informado con toda claridad y detalle por el representante de la mayoría de la comisión y por el miembro informante de la minoría. En el mismo sentido afirmativo han dado sus opiniones los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra.

En el tratamiento en particular solicitaré de la comisión una explicación sobre el párrafo segundo del inciso *a*) del artículo 17 del proyecto de ley, para que queden las manifestaciones del miembro informante de la comisión como interpretación parlamentaria.

Sr. Presidente (Decavi). — No habiendo otros diputados anotados para hacer uso de la palabra, se va a llamar para votar.

Sr. Pologna. — Solicito que se pase lista.

Sr. Presidente (Decavi). — Por Secretaría se va a pasar lista.

—Mientras se pasa lista:

Sr. Presidente (Decavi). — En este momento hay quórum.

Se va a votar en general si se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley enviado en revisión.

—Resulta afirmativa de 92 votos; votan 95 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración en particular.

Sr. Juri. — Señor presidente: propongo que se engloben en una sola votación todas las modificaciones.

Sr. Marini. — Desearía conocer el alcance de la moción, porque voy a pedir la modificación del artículo 15.

Sr. González. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. González. — Propongo que la Presidencia enuncie las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, considerándose aprobadas las que no fueren observadas. De manera que

cuando lleguemos a la modificación a que aludió el señor diputado Marini, él pueda formular la observación que estime pertinente.

Sr. Parodi Grimaux. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Parodi Grimaux. — Señor presidente: quiero recordar que el artículo 164 del reglamento expresa que las votaciones deben constreñirse a un solo asunto, y además que en caso de constar de varias partes un artículo puede votarse dividido. En consecuencia, la votación global que propone el señor diputado por Mendoza, reglamentariamente no corresponde.

Para abreviar el trámite de las votaciones, podría utilizarse el procedimiento propuesto por el señor diputado González.

Sr. Presidente (Decavi). — La Honorable Cámara debe pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, desde que la sanción de la Honorable Cámara queda firme en las partes no modificadas. Pero necesariamente tenemos que seguir el orden correlativo, de todos los artículos de la sanción del Senado porque en ella se ha hecho un reordenamiento total del texto originario enviado en revisión. Por eso es aconsejable votar correlativamente todos los artículos de la sanción del Senado para no incurrir en omisiones.

—Asentimiento general.

Sr. Presidente (Decavi). — Habiendo asentimiento general, se procederá en esa forma.

—Se aprueban los artículos 1º, 2º y 3º.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 4º.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Cortés. — Quiero formular una observación con respecto al reconocimiento de un representante de los fraccionadores de vinos.

La producción de vino es un proceso integral. Fraccionadores de vinos son también las bodegas. Vale decir que no puede establecerse una división entre productores de vino y fraccionadores. El fraccionamiento es la última etapa de la actividad industrial.

Por ello, votaré en contra de la disposición que establece un representante para los fraccionadores de vino; o, en defecto, propongo a la Cámara una modificación del último apartado del artículo 4º que diga, en vez de un representante de los fraccionadores, un representante de los productores fraccionadores.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fossati. — La comisión mantiene su despacho que aconseja la aprobación de las modificaciones del Senado.

Si el señor diputado Cortés más adelante propone la supresión del representante de los fraccionadores de vinos mediante un proyecto de ley, a título personal, manifiesto que lo acompañaré con mi voto. Pero, en la presente circunstancia, aceptar la modificación que sugiere el señor diputado implicaría demorar más aún la sanción de una ley ya postergada por el Congreso Nacional.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Suárez. — Señor presidente: en la consideración en general hice constar mi discrepancia por la forma en que se integraba la representación en el Consejo, al darse poca intervención a las actividades que se relacionan con el proceso económico del vino. Pero como cualquier reforma puede demorar nuevamente la sanción definitiva del proyecto, no voy a proponer ninguna modificación, porque creo que es de vital necesidad que el país tenga urgentemente la ley de vinos.

Quiero dejar esto sentado para explicar mi posición.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Cortés. — Acepto el temperamento propuesto por el señor presidente de la comisión: presentaré oportunamente un proyecto de ley que modifique la composición del instituto en lo que se refiere al representante de los fraccionadores.

Por lo tanto, retiro mi proposición.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rodríguez Araya. — En el artículo que consideramos, se establece que habrá un representante del resto de las provincias vitivinícolas por orden de producción, que se elegirá cada cuatro años.

Yo entiendo que se deja establecido que cuando tenga que elegirse al sustituto del primer representante, si la provincia a que éste representaba ha sido superada en la producción por otra, no podrá haber reelección.

Sr. Juri. — Serán los propios productores agrarios quienes harán la elección de representante a través de una reunión.

Sr. Rodríguez Araya. — No, señor diputado. El artículo establece que será un representante del resto de las provincias vitivinícolas, por orden de producción.

Sr. Juri. — La designación estará a cargo del Poder Ejecutivo.

Sr. Rodríguez Araya. — ¿Y elegirá al representante de cualquier provincia o de la que esté primera en el orden de producción?

Sr. Juri. — El Poder Ejecutivo atenderá la sugestión del grupo de productores.

Sr. Recio. — ¿Pero teniendo en cuenta el orden de producción de las provincias?

Sr. Suárez. — Si me permiten los señores diputados...

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Suárez. — El espíritu del artículo es —según lo que se desprende de la discusión habida en el Senado y también de lo que se dijo en esta Cámara en su oportunidad— que hay un orden, pero que debe haber rotación. Esto es lo que se explicó por parte del señor senador por La Rioja al producirse la discusión en particular.

De modo que debe hacerse una interpretación cabal en este sentido: que el orden es rotativo, que el representante corresponde en distintas oportunidades a cada una de las provincias, y no en forma permanente a la que tenga mayor producción. Para nombrar al primer representante se tendrá en cuenta a la de mayor producción en la actualidad.

Sr. Rodríguez Araya. — ¿Entonces no habría reelección del representante?

Sr. Suárez. — No habría reelección.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Silveira Márquez. — Sólo deseo hacer notar al señor miembro informante de la Comisión de Industria y Comercio que no se aceptó la modificación propuesta por el señor diputado Cortés en razón de la economía de tiempo, para que hoy pueda producirse la sanción de la ley. Pero el señor diputado Marini, cuando se ponga en consideración el artículo 15, señalará una falla, una laguna o una mala articulación de la ley, que, de ser aceptada por la comisión y por la Cámara, hará que el proyecto tenga que volver al Senado.

Sr. Fossati. — El criterio que hemos adoptado es de no aceptar enmiendas al despacho. Si se tratara de modificaciones como la que presentó el señor diputado Cortés, que contarán con un criterio favorable de los señores diputados la comisión haría lo que ya se hizo en ese caso: manifestar su conformidad con la modificación proyectada, pero que ésta se presente por la vía de otro proyecto de ley.

Nosotros estamos actuando en función de lo que ha dicho el señor diputado Suárez: apremiados por la urgente necesidad de que la ley tenga pronta vigencia.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Presidente (Decavi). — Señores diputados: es habitual que los señores diputados que se retiran del recinto no regresen a él de inmediato, en la confianza de que otros señores diputados van a integrar el quórum.

Quiero hacer notar a los señores diputados que en la casa hay quórum estricto, de modo que por un solo señor diputado que abandone

el recinto debe postergarse la votación. Consecuentemente, la Presidencia se verá precisada a aplicar en forma estricta el reglamento, e inclusive, a levantar la sesión.

Sr. López Aguirre. — La Presidencia puede aplicar el artículo 151 del reglamento, que establece que ningún diputado podrá retirarse de la sesión sin permiso de la Presidencia.

Sr. Presidente (Decavi). — La Presidencia no puede conceder el permiso sin el consentimiento de la Honorable Cámara cuando el diputado que desea retirarse quiebra el quórum. Por eso ha hecho la advertencia a los señores diputados de que no abandonen el recinto.

Sr. Rodríguez Araya. — Debemos aclarar que no puede aplicarse sanciones a diputados que venimos a la Cámara, sino a los que no vienen nunca.

Sr. Presidente (Decavi). — Los señores diputados tienen el control de las licencias que otorgan, lo que deben de tener presente a los efectos de la conservación del quórum.

Sr. Parodi Grimaux. — Debemos aclarar que si bien es cierto que el reglamento prevé la posibilidad de que un diputado rompa el quórum, también es cierto que el reglamento no contempla la sanción a aplicar.

Yo preguntaría si un diputado en este momento, valiéndose de un recurso parlamentario legítimo, resolviera romper el quórum retirándose del recinto, ¿qué sanción aplicaría la Cámara? Tendríamos que ir a la compulsión mediante la fuerza, y creo que todavía no podemos llegar a ese extremo.

Sr. Presidente (Decavi). — Exactamente. Por eso la Presidencia formula una exhortación.

Sr. Pozzio. — Hay que llamar a la seriedad y reflexión a los señores diputados para que no se ausenten del recinto.

Sr. Presidente (Decavi). — En este momento hay quórum estricto en el recinto y en la casa.

Habiendo retirado el señor diputado Cortés la modificación propuesta al artículo 4º, y no mediando otras, se lo dará por aprobado.

—Se aprueban los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 y 14.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 15.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Marini. — La advertencia que formuló la Presidencia nace un instante con respecto a la forma cómo debía efectuarse la votación, me recuerda que la modificación que iba a proponer el artículo en consideración no la puedo hacer en este momento. Deseaba proponer la enmienda, porque si bien es cierto que la redacción del artículo 15 de la sanción del Honorable Senado mejora indudablemente la de esta Cámara, tampoco resuelve el problema según mi

punto de vista. La verdad es que la modificación que pensaba sugerir era para reivindicar los derechos que a mi juicio tiene la Dirección Nacional de Química para hacer ella, y no otra repartición, los análisis. Es decir que yo deseaba proponer una modificación que adjudicara esa facultad a la Dirección Nacional de Química y no al instituto tal como lo establece este artículo 15.

Estimo que la Dirección Nacional de Química es una oficina que cuenta con los elementos necesarios y eficientes para poder producir los análisis, pues tiene técnicos de gran competencia.

Si nosotros mantenemos la sanción del Senado, lo único que conseguiremos es crear un problema estrictamente burocrático, o sea duplicar el personal sin ningún sentido de eficiencia mayor, porque si bien puede fallar la Dirección Nacional de Química en algunos de los aspectos o trabajos que realiza, es puramente un factor humano que también podría estar presente en el Instituto u organismo que se crea por el artículo 15.

Al hacer esta manifestación dejo sentado que oportunamente presentaré un proyecto modificando el artículo 15 en el sentido de que los análisis a que se refieren las disposiciones de la ley o las reglamentaciones, así como la calificación legal de los productos, los practique la Dirección Nacional de Química, que cumplirá su cometido de acuerdo con las normas vigentes.

Lamento haber hecho perder este tiempo a la Cámara, pero debía enunciar mi propósito para hacer justicia a una repartición del Estado que cumple con eficiencia su cometido.

Sr. Presidente (Decavi). — Con las aclaraciones formuladas por el señor diputado, y retirada la objeción al artículo, éste se dará por aprobado.

—Se aprueban los artículos 15 y 16.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 17.

Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Moreno. — Quiero pedir una aclaración a la comisión, referente al segundo párrafo del inciso a), artículo 17, de la sanción del Honorable Senado, que dice: «A este efecto, la reglamentación fijará los grados Beaumé mínimos de las uvas, según las zonas y condiciones climáticas.»

Mi provincia es favorecida por los climas, y en ella se dan uvas de alta graduación, pero también hay en la misma zona producción de uvas de baja graduación. Puede ocurrir que si la autoridad competente fija, por ejemplo, una graduación mínima de 15 grados, y en otras zonas no se llega a esa graduación, se plantee una situación confusa que es necesario aclarar.

En consecuencia, solicito a la comisión me dé una explicación al respecto, a los efectos de la debida reglamentación de la ley.

Sr. Presidente (Decavi). — ¿El señor diputado hace alguna proposición?

Sr. Moreno. — No, señor presidente. He pedido, simplemente, una aclaración.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Juri. — El señor diputado Suárez, en una interrupción, explicó el alcance de esta disposición.

Tal como lo expresa el artículo, quedará sujeto a la reglamentación; es decir, hay zonas donde por razones climáticas la uva no podrá tener más de doce o trece grados, y otras donde podrá tener quince o dieciséis. Por eso la fijación de los grados se hará de acuerdo con la zona. No podemos pretender que la uva de Río Negro, que no es una zona cálida, tenga la misma graduación alcohólica que la de La Rioja o la de Catamarca.

Sr. Moreno. — Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Presidente (Decavi). — Si no se formulan observaciones, se dará por aprobado el artículo.

—Se aprueban los artículos 17 a 44.

—El artículo 45 es de forma.

Sr. Presidente (Decavi). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley (1).

Se va a votar si se realiza en el Diario de Sesiones la inserción solicitada por el señor diputado Suárez.

—Resulta afirmativa de 89 votos; votan 99 señores diputados (2).

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar si se realiza en el Diario de Sesiones la inserción solicitada por el señor diputado Fossati.

—Resulta afirmativa de 90 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — Se realizarán las inserciones en el Diario correspondiente a la sesión en que fueron solicitadas.

2

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Decavi). — Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Recio. — Siento el deber imperioso de exponer ante la Honorable Cámara hechos anor-

males que por su naturaleza y por la investidura del poder al cual afectan, el Poder Judicial, independientemente de la cuestión de privilegio en sí, que formularé, adquieren una fisonomía especial y es aconsejable que cuando menos, tomen estado parlamentario en este recinto a través de las breves palabras que pronunciaré. Esté segura la Honorable Cámara de que este asunto está desprovisto de todo aspecto político partidario, ya que lo tomo en su más elevado nivel, como creo que lo hará la propia bancada mayoritaria.

En el día de hoy, hace breves momentos, he sido impedido físicamente de ingresar en el Palacio de Justicia de la Capital Federal. Aclaro que no ha existido un impedimento por la fuerza de ningún funcionario del Poder Judicial ni de ningún otro poder. Simplemente, una elemental sensibilidad física me impidió llegar hasta el lugar a donde quería dirigirme, por cuanto los gases lacrimógenos llenaban en ese momento la casa de la justicia y me hicieron desistir de este propósito. Por otra parte, se producía en esos momentos un despliegue espectacular de fuerzas policiales que ocupaban todos los pisos del palacio, con sus correspondientes cascos de acero, armas automáticas, lanzagases, carteras con provisión de municiones, altavoces, radioteléfonos, etcétera.

Me adelanto a una objeción mínima que podría hacerse, aclarando que considero necesario —y está dentro de las facultades y deberes del poder administrador— preservar el orden. Pero hay formas de preservarlo que parecieran encaminadas precisamente a desencadenar el desorden. He recogido una breve información al respecto que me afirma en esa creencia.

Es público y notorio que ayer ha comenzado un movimiento de fuerza entre el personal del Poder Judicial. El problema es conocido por todos los señores legisladores, no sólo por aquellos que somos abogados y que formamos buena parte de este cuerpo. Para resumirlo, bastaría decir que un juez de primera instancia percibe menos sueldo que un comisario de policía.

Sr. Parodi Grimaux. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Recio. — Sí, señor diputado. Entiendo que será para auxiliarme en la cuestión que estoy planteando.

Sr. Parodi Grimaux. — Más que para auxiliarlo, porque evidentemente el señor diputado no necesita auxilio, es para auxiliarme a mí mismo.

Quisiera que el señor diputado nos expresara en concreto, para poder ir formando juicio sobre si es una cuestión preferente o no, en qué forma se habría violado el privilegio.

Sr. Recio. — Le pido al señor diputado, porque lo sé inquieto por todos los problemas que afectan a la Nación, que espere hasta que finalice esta breve exposición para satisfacer su

(1) Véase el texto de la sanción en la página 4427 del Diario de Sesiones.

(2) Véase el texto de la inserción en la página 4434 del Diario de Sesiones.